

DICIEMBRE 6 DE 1934

67ª REUNION — 9ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES ANTENOR R. FERREIRA, ROBERTO J. NOBLE
Y RODOLFO COROMINAS SEGURA

MINISTROS PRESENTES: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; de Agricultura, ingeniero Luis Duhau; DIPUTADOS PRESENTES: Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Ameri Rogelio L., Amoedo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Arce José, Arnoldi Adolfo, Arrieta Herminio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Buitrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Cafferata Juan F., Candia Cornelio, Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carreras José, Carús Agustín J., Castiñeiras Alejandro, Coca Joaquín, Contte José A., Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Costa Méndez Nicanor, Dávila Miguel V., Della Latta Jerónimo, De Miguel Benito, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Escobar Adrián O., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Ganza Marcelino, García Gorostiaga Raúl, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Maseda Manuel, González Valentin, Graffigna Santiago, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Jardel Enrique C., Lamesa Juan B., López Héctor S., Magris Amleto, Mancini Rafael, Marcó Cipriano F., Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Morrogh Bernard Juan F., Mouchet Enrique, Mouesca Eduardo, Movsiehoff Bernardo, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla Tiburcio, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Parera Gregorio, Parodi Misael J., Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Pressacco Juan P., Pueyrredon Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Ramiconi Luis, Ramírez Manuel (h.), Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rozas José E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Oscar, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino, Simón Padrós Juan, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Rodolfo G., Vionnet Rodolfo L., Wade Eugenio, Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Acosta Guillermo, Aráoz José Ignacio, Becerra Eugenio A. (h.), Bosano Ansaldo Daniel, Calderón Osvaldo M., Critto Miguel, Degano Alfredo P., Escalera Facundo, Fresco Manuel A., Garayalde José María, Herrera Bruno J., Lencinas Rafael Néstor, Lima Vicente Solano, Rojas Marcos E., Salas José Raquel, Saravia José M.; CON AVISO: Courel Carlos D., Korn Guillermo, Vallejo Luis A.; SIN AVISO: Aráoz Eudoro D., Castro Felipe, Godfrid Juan, Manacorda Carlos, Ocampo Enrique, Pomponio Vicente E., Repetto Agustín, Ruiz Guinazú Jacinto, Videla Dorna Daniel, Vignart Uberto F.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Despachos de comisión.
- II.—Peticiones particulares.

- 4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Escalera y Critto.
- 5.—Termina la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre creación de la Junta Reguladora de Vinos.
- 6.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.

- 7.—Se considera el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, aprobando la conversión de cédulas del Banco Hipotecario Nacional.

—En Buenos Aires, a seis de Diciembre de 1934, siendo la hora 15 y 28:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pueyrredon. — Hago indicación para que se espere un cuarto de hora más, a fin de obtener quórum.

Sr. Bustillo. — Podría continuarse llamando media hora más.

Sr. Pueyrredon. — Acepto, señor diputado.

Sr. Presidente (Ferreira). — Si hay asentimiento, se esperará.

—Asentimiento.

—A la hora 15 y 38:

2

ACTA

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda abierta la sesión con la presencia de 80 señores diputados.

Se va a leer el acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Benegas, se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Despachos de comisión

OBRAS PÚBLICAS:

En el proyecto de ley del señor diputado Zarazaga, sobre estudios para la construcción de un dique de embalse en el río Pichanas, obras complementarias y planta hidroeléctrica.

—En el proyecto de ley del señor diputado Courel y otros señores diputados, sobre construcción de un dique en el Bajo de Colopina, departamento de Cruz del Eje, Córdoba.

—En el proyecto de ley, en revisión, sobre construcción de obras hidráulicas en el río Dulce, Santiago del Estero.

—A la orden del día.

II

Peticiones particulares

SOLICITUD DE SUBSIDIO:

Asociación Nacional Pro Patria, de Señoritas.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

4

LICENCIAS

1

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1934.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Antenor R. Ferreira.

Por su intermedio solicito de la Honorable Cámara licencia para faltar a dos sesiones.

Saludo al señor presidente con mi mayor consideración.

Facundo Escalera,

—Sin observación, se vota y acuerda, con goce de dieta, la licencia solicitada.

2

Tucumán, 5 de Noviembre de 1934.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Antenor R. Ferreira.

Solicito intermedio señor presidente a la Honorable Cámara, permiso para faltar sesiones hasta el día 22 de Diciembre.

Saludo atentamente al señor presidente.

Miguel Critto.

—Sin observación, se vota y acuerda, con goce de dieta, la licencia solicitada.

5

JUNTA REGULADORA DE VINOS

Sr. Presidente (Ferreira). — Se pasará a la orden del día.

Quedó pendiente de votación en general el proyecto de ley, por el que se crea la Junta Reguladora de Vinos, que se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Ghioldi. — ¿Por cuántos votos?

Sr. Prosecretario (Madero). — Por 48 votos. Votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Ferreira). — En consideración en particular.

—En discusión el artículo 1º.

Sr. Noble (J. A.). — Pido la palabra.

Consta en el despacho la disidencia del grupo demócrata progresista al artículo 1º del proyecto. El señor diputado Godoy en su excelente informe de ayer ha anticipado los caracteres de nuestra disidencia.

Aceptamos la necesidad de dictar esta ley como un hecho ineludible. La industria está en crisis y no podemos cerrar los ojos a la evidencia. Creemos que el camino propuesto por el Poder Ejecutivo, salvo modificaciones que en particular iremos señalando y de algunas que ya hemos indicado y han sido aceptadas por la comisión, conduce a la finalidad buscada. Consideramos la situación actual como una de las tantas manifestaciones de las fallas de la actual organización industrial, y como consecuencia de la política proteccionista y del excesivo optimismo, en unos casos y de la falta de escrúpulos en otros, de los industriales del vino. El proyecto comporta un principio de reacción en cuanto significa la posibilidad de realizar un reajuste con imposición de normas técnicas y económicas provechosas.

Creemos indispensable que la junta a crearse ofrezca garantías de prescindencia en materia política. Designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, no ofrece esas garantías de prescindencia. No se nos oculta que los intereses en juego son tan extraordinarios que desde ese organismo podrán desarrollarse presiones políticas electorales irresistibles, tal cual ha ocurrido ya en Mendoza con otras actividades vinculadas a la industria vitivinícola. Es de conocimiento de la Cámara hasta qué punto el manejo del riego en época reciente fué decisivo en campañas electorales; los señores diputados por la provincia de Mendoza han podido decir algunas cosas interesantes a este respecto.

Nuestra preocupación por alejar la política de la junta se justifica enton-

ces. Siguen en juego los mismos intereses, y no sería extraño que hombres nombrados por cuerpos políticos pudieran ejercer sus funciones encaminándolas a torcer la voluntad de quienes en razón de sus actividades les estarán supeditados. Por eso es interesante incorporar a la junta miembros designados por organizaciones que, aun en los peores momentos de la política argentina, se han mantenido un tanto al margen de la política crudamente electoral, como ha ocurrido con el Banco de la Nación y con el Banco Hipotecario.

La constitución de una junta de cinco miembros, tres de los cuales serían designados por el Poder Ejecutivo, tal como lo aconseja la comisión, uno por el Banco de la Nación, y otro por el Banco Hipotecario, aseguraría el desplazamiento de los intereses electorales.

Hay razones de otro orden que aconsejan también la incorporación de representantes de estas dos instituciones oficiales. El señor diputado Godoy, anticipando las razones que tuvo la comisión para no aceptar mi proposición, decía ayer que ella consideró conveniente que los intereses de estas dos instituciones no gravitaran en el seno de la junta ejecutiva y se hicieran sentir desde la junta asesora. No hay duda de que en ésta podrán defender los cuantiosos intereses que tienen comprometidos en la industria vitivinícola; pero no lo podrán hacer con la eficacia que consideramos indispensable. Ello sólo será posible mediante la incorporación de los representantes a la junta ejecutiva, pues la comisión asesora no tendrá — bien se sabe lo que ocurre siempre con esa clase de organismos — una gravitación importante.

Por eso, por considerar que los representantes de esas dos instituciones constituirán una garantía de prescindencia en materia política electoral y por creer que los intereses de los dos bancos comprometidos en la industria justifican su intervención directa en el contralor de la industria, hemos formulado esta disidencia, y proponemos concretamente a la Cámara la modifi-

cación del artículo 1º en el sentido de que se amplíe la junta con dos miembros designados en la forma que he expresado.

Sr. Buira. — Pido la palabra.

Deseo proponer un agregado en el segundo apartado del artículo 1º, en lo que se refiere a la constitución de la comisión asesora honoraria.

En dicho artículo se establece que la comisión asesora honoraria se compondrá de representantes del Banco de la Nación, del Banco Hipotecario Nacional, de las provincias; y yo agregaría: de los territorios nacionales productores.

Es evidente que si esta ley ha de regir en todas las regiones del país donde se cultiva vid, no estarán en una situación cómoda los productores de Río Negro y Neuquén, mientras no tengan en la junta una voz que se haga escuchar, para luego aplicar las disposiciones de los incisos a), b), c), d), etcétera, del artículo 2º.

Creo, señor presidente, que sería de elemental justicia incorporar a esta comisión honoraria a los miembros representantes de los territorios nacionales productores.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Para decir pocas en apoyo de las dos mociones que se han presentado.

En cuanto a la del señor diputado Noble, me parece bien fundada, porque es notorio que los principales propietarios de bodegas y viñedos en la República son precisamente los bancos de la Nación e Hipotecario. Ellos tienen, por lo tanto, el derecho de formar parte de esa junta con las mismas facultades ejecutivas de los miembros designados por el Poder Ejecutivo.

Creo que es una situación inconveniente para la industria y para los fines de la ley recluir a los representantes de los dos principales propietarios de la industria, en una comisión asesora compleja, en la que habrá de hecho mayoría de representantes políticos, como lo serán inevitablemente los representantes de las provincias productoras.

Creo, también, que se impone incluir

a los territorios productores. Río Negro produce más vino que La Rioja y Catamarca. La producción vinícola de Río Negro, como consta en el interesante informe de un funcionario del Ministerio de Agricultura, que acaba de publicarse, acrecerá en los próximos años por las grandes extensiones plantadas que todavía no han entrado en producción.

Sería injusto que de esa junta asesora estuviera excluido el territorio de Río Negro, y que quedaran así sus intereses posiblemente sacrificados a los de las principales provincias viticultoras.

Creo suficientes estas palabras para fundar mi apoyo a las dos proposiciones, y encarezco a la comisión que las acepte, porque ambas son perfectamente conducentes a los fines de la ley, si se la concibe y siente con espíritu nacional y no exclusivamente con criterio regional.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Respecto de la indicación formulada por el señor diputado Noble, ya anticipé en el debate en general los motivos que había tenido la comisión para no aceptarla. Agregaré solamente que esa junta ejecutiva será integrada con acuerdo del Senado, de modo que sus miembros gozarían de una total independencia en el desempeño de su cometido. Sería un tanto difícil concebir que funcionarios de bancos oficiales puedan integrar la junta, porque mientras el acuerdo del Senado les da total independencia, por su origen no pueden dejar de ser funcionarios dependientes de dos reparticiones oficiales, lo que los colocaría en una situación ambigua.

Por otra parte, es evidente que los intereses de los bancos oficiales tendrían forzosamente que ser considerados, y que una resolución que pueda adoptar la Junta Reguladora de Vinos y que afecte directamente a los intereses de estos bancos, no podrá tomarse sin previo acuerdo con los directorios de los bancos o con los representantes que esas instituciones destaquen para entenderse con la Junta Reguladora

de Vinos. En la práctica, se va a llenar ampliamente el objetivo que persigue el señor diputado Noble con su proposición, sin las dificultades que podría traer el dar completa estabilidad a delegados que, por el hecho de serlo, pueden ser removidos a voluntad por la institución que los designe. Si fueran a integrar la junta únicamente con el carácter de representantes de cada uno de los bancos, los directorios de éstos estarían habilitados para substituirlos por otros funcionarios del Banco en el momento que quisieran. En cambio, lo que se persigue por el artículo de la ley, es dar estabilidad e independencia completas a los miembros de la junta.

En cuanto a la observación del señor diputado Buira, digo, que su proposición está comprendida dentro del enunciado del artículo al referirse «a los demás intereses afectados», y así lo ha entendido la comisión al resolver análoga indicación que el señor diputado Bustillo formuló en el seno de la comisión. Se le respondió que el caso de los territorios nacionales estaba contemplado y que sus representantes podrían integrar la comisión asesora, de acuerdo con la facultad que se le acuerda al Poder Ejecutivo. No habría dificultad en decirlo expresamente. Por mi parte, acepto que el artículo diga: «de las provincias y territorios nacionales productores, y demás intereses afectados». La comisión ha coincidido por completo con el principio que contiene la modificación propuesta.

Sr. Carreras. — Pido la palabra.

No me referiré a la proposición del señor diputado Noble porque ha sido demasiada clara, precisa y convincente. Es mi propósito pedir a la comisión que cambie la redacción de la primera parte del artículo en donde dice: «las relaciones de la junta con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del Departamento de Agricultura». Como conviene guardar la mayor corrección de lenguaje en el articulado de la ley, voy a proponer un cambio de palabras. El término «relación» es demasiado abstracto y nada significa cuando no está determinado o calificado; y la palabra

«conducto» es demasiado material, tanto que hasta podría afectar la susceptibilidad del señor ministro de Agricultura. Creo que la redacción más apropiada sería: «el Ministerio de Agricultura intervendrá en todas las dificultades o consultas que puedan producirse entre la junta y el Poder Ejecutivo.» En esta forma queda expresado el pensamiento de la comisión de que sea el Ministerio de Agricultura el que deba intervenir en las cuestiones entre la junta y el Poder Ejecutivo y la redacción es más concreta y correcta.

Sr. Godoy. — El concepto de la comisión es que la junta dependerá del Ministerio de Agricultura.

Sr. Carreras. — Así ha sido expresado. Lo que propongo es suprimir la palabra «conducto» que, si bien es usual, la considero poco correcta.

Sr. Godoy. — En realidad, queda la misma cosa.

Sr. Carreras. — La palabra «relación» es demasiado abstracta. La redacción que yo propongo se refiere a las consultas, dificultades o cuestiones que se podrían plantear entre la junta y el Poder Ejecutivo.

Sr. Godoy. — No solamente es esa la jurisdicción que tendrá el Ministerio de Agricultura, sino que podrá nombrar personal inferior, que lo propondrá la junta, pero deberá ser designado por intermedio del ministerio. La forma que propone el señor diputado es demasiado restringida y en algunos casos significará dificultades.

Sr. Carreras. — No hago cuestión sobre el texto, señor diputado, si el concepto es el mismo.

Sr. Presidente (Ferreira). — ¿Retira su indicación el señor diputado?

Sr. Carreras. — Si la comisión lo acepta, bien; sino, no hago cuestión.

Sr. Godoy. — La comisión mantiene la primitiva redacción, porque entiende que ella comprende lo que el señor diputado propone y que es un poco más amplia, lo cual juzga indispensable para la buena marcha de este nuevo organismo.

Sr. Presidente (Ferreira). — ¿La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado Buira?

Sr. Godoy. — Sí, señor presidente.

Sr. Noble (J. A.). — Yo propongo el agregado de dos miembros.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Para facilitar la votación, propongo que se haga en la siguiente forma: que en el segundo párrafo de este artículo, después de las palabras «con acuerdo del Honorable Senado», se voten por separado las siguientes: «un representante del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional nombrado por dichas entidades».

Sr. Noble (J. A.). — Acepto la redacción.

Sr. Bunge. — Serán nombrados por acuerdo del Senado los representantes del Poder Ejecutivo y por resolución de los propios bancos los representantes de los mismos.

Sr. Vicchi. — La comisión no ha aceptado esa parte.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el primer apartado que consta de dos partes; se leerá la primera.

—Se lee:

Créase con carácter de emergencia la Junta Reguladora de Vinos que será designada por el Poder Ejecutivo y funcionará con la colaboración de una comisión asesora honoraria. Las relaciones de la junta con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del Departamento de Agricultura.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el primer párrafo del 2º apartado.

—Se lee:

La Junta Reguladora de Vinos estará constituida por un presidente y dos vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Bunge. — Que se vote ahora por separado el agregado que he propuesto.

Sr. Presidente (Ferreira). — El agregado del señor diputado Noble...

Sr. Vicchi. — La comisión no acepta.
Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Este asunto ha sido discutido en el seno de la comisión. Por nuestra parte, a pesar de haber votado en contra de este proyecto, hemos colaborado en su mejoramiento una vez que fué aprobado en general. El recuerdo que ha hecho el señor miembro informante de haberse establecido que la Junta Reguladora fuera nombrada con acuerdo del Senado, es una proposición nuestra que ha merecido la aprobación de la comisión. No hemos votado que se incorporen a la junta ejecutiva representantes del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario, porque creemos que éstos están bien en la junta asesora, porque son tantos y tan cuantiosos los intereses de estas instituciones, que ellas podrían gravitar de manera decisiva en las soluciones con criterio exclusivamente bancario...

Sr. Noble (J. A.). — Creo que hay una falla en la memoria del señor diputado, pues sus compañeros de representación votaron por la incorporación.

Sr. Dickmann (A.). — Por mi parte, puedo decir que no me falla la memoria, aunque es posible que algunos otros miembros del sector hayan votado a favor.

Sr. Noble (J. A.). — Sólo he dicho que lo que falla es la memoria.

Sr. Dickmann (A.). — De mí sé decir que mantengo mi punto de vista.

Sr. Noble (J. A.). — El señor diputado no votó en la comisión porque en ese momento la presidía, pero sus colegas votaron la incorporación.

Sr. Dickmann (A.). — Está muy cerca espiritualmente de mí el señor diputado, pero en la comisión está lejos físicamente...

Sr. Noble (J. A.). — Pero espiritual e ideológicamente siempre estoy cerca del señor diputado.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por Santa Fe, que se va a leer.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — A continuación de las palabras: «del

Honorable Senado», el señor diputado propone: «y dos vocales en representación del Banco de la Nación Argentina y Banco Hipotecario Nacional, nombrados por dichas entidades».

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar.

— Resulta negativa.

— Se vota el resto del artículo, en la forma despachada por la comisión, y resulta afirmativa.

— En discusión el artículo 2º.

Sr. Vicchi. — Propongo que artículo que no se observe se dé por aprobado.

Sr. Pena. — Como el artículo 2º tiene varios incisos, propongo que se trate cada uno por separado.

Sr. Vicchi. — Manteniéndose mi indicación de que aquél que no se observe se dé por aprobado.

— Asentimiento.

Sr. Bunge. — Pido la palabra para solicitar una aclaración de la comisión al inciso a) de este artículo.

Sr. Palacín (M.). — Pido la palabra para hablar sobre el artículo en su totalidad.

Sr. Presidente (Ferreira). — Tiene la palabra el señor diputado.

Sr. Palacín (M.). — En los fundamentos con que el Poder Ejecutivo acompañó el proyecto que la comisión ha despachado, ajustándolo en la medida de lo posible a las aspiraciones de los industriales, se repite el siguiente concepto: «Esta nueva crisis vinícola encuentra exhaustos a productores y bodegueros. Varios años de adversidad e intervenciones contraproducentes en el juego espontáneo de la industria, han agotado sus reservas impidiéndoles mantenerse en pie si la baja de precios se prolonga. Actualmente, el vino se vende en Mendoza a mucho menos que su costo. La producción se

descapitaliza, los créditos bancarios se congelan irremisiblemente y la quiebra de la industria es inminente».

Este concepto se repite en los fundamentos que acompaña el Poder Ejecutivo, el concepto de que esta crisis es la consecuencia de la política seguida por la industria vitivinícola de Cuyo, de efectos contraproducentes. Y el artículo 2º del proyecto de ley que estamos tratando no es sino un programa de acción que reitera los nefastos procedimientos que han de traer a este Parlamento en el futuro el mismo problema, posiblemente agravado.

Con el programa que contiene este proyecto en su artículo 2º, no se inicia una nueva política para la industria vitivinícola de Cuyo. Y aunque podríamos decir que en la discusión en general se ha agotado el tema, conviene sin embargo repetir en el Congreso esta profunda verdad: todo el problema vitivinícola de Cuyo no tiene otra explicación que la de que esas provincias, al gravar a los vinos que salían de las mismas, han establecido una prima de más de 15 ó 20.000.000 de pesos para el fomento de la vitivinicultura fuera de la región cuyana. Esa es la explicación simple, señores diputados por Mendoza.

Sr. Vicchi. — ¿El impuesto es una prima?

Sr. Palacín (M.). — El impuesto que grava la salida de vinos de Cuyo se transforma en una prima de fomento para la vitivinicultura fuera de las provincias de Cuyo.

Sr. Corominas Segura. — ¿Me permite una interrupción, si no le molesta?

Sr. Palacín (M.). — No me molesta; pero ya sé los argumentos que van a traer los diputados por Mendoza.

Sr. Corominas Segura. — He de ser breve.

Sr. Presidente (Ferreira). — ¿Acepta la interrupción el señor diputado?

Sr. Palacín (M.). — Sí, señor presidente.

Sr. Corominas Segura. — En lo que expresa el señor diputado, hay contradicción; entre sus dos argumentos hay oposición. Hace un momento manifestaba que este proyecto no constituye ninguna innovación respecto de las medidas aceptadas para salvar la crisis de la industria vitivinícola; y luego se encarga de destacar que existe una profunda diferencia entre los anteriores y los actuales métodos. Hasta hoy las medidas eran adoptadas simplemente en cada una de las provincias, dentro del respectivo territorio, lo que permitía la situación que acaba de poner de manifiesto el señor diputado: que esas medidas locales se convertían en verdaderas primas en favor de la producción de otras zonas, donde tales procedimientos no tenían aplicación. Así, por ejemplo, las leyes de impuestos sancionadas en la provincia de Mendoza no regían para la producción de Río Negro, que soportaba sólo un impuesto nacional de $\frac{1}{2}$ centavo por litro.

Sr. Palacín (M.). — ¿Dónde está la contradicción?

Sr. Corominas Segura. — En que este proyecto de ley constituye realmente un cambio fundamental del sistema. Es un sistema nacional, que regirá en todo el país.

Sr. Palacín (M.). — Sí; pero no es este proyecto, señor diputado por Mendoza, el que establece la innovación a que acaba de referirse, sino el de la unificación de impuestos. De hoy en adelante la vitivinicultura de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, Salta y Río Negro, no gozará de la prima de fomento de que gozaba hasta este momento; pero no en virtud del proyecto que discutimos, sino por la sanción que la Cámara ha otorgado a la unificación de impuestos internos.

De ahí deduzco, señor presidente, — y sé que estoy en la verdad irrefutable — que la Nación acaba de consumir el máximo sacrificio a que pueden aspirar las provincias de Cuyo, y que de hoy en adelante la Nación debe dejar a esas provincias que luchen y triunfen en una competencia leal con

la industria vitivinícola del resto del país, para la cual están armadas con privilegios naturales de rendimiento y de excelencia del producto, siempre que ese producto no se deteriore con el uso del agua o con el de las drogas.

Ahora este plan revive el plan de las sociedades vitivinícolas que se fundaron y se fundieron en la región de Cuyo. Es cierto que se le disimula un poco porque se habla en el apartado a) de otorgar indemnizaciones equitativas que promuevan la supresión en la medida indispensable de la vid vinífera o su substitución por uva de mesa o de pasas o por otros cultivos, mientras que la política defensora de la vitivinicultura de Mendoza ejercida hasta ahora por la acción privada y con un condenable apoyo de los institutos bancarios oficiales, se limitaba a anular alguna parte de la producción de la uva vinífera. No se descuidaba, sin embargo, decir en aquellos programas que se trataría de propender a la substitución de cultivos a fin de aminorar el exceso de producción.

Quiero decir ahora otra cosa a la Honorable Cámara. Si en algún problema se apela a las estadísticas, y a los números para ocultar la verdad es en éste. Estadísticas malas, incompletas: unas dan un consumo de vino para el país y otras dan otro.

En el excelente trabajo, como análisis, que se nos ha hecho llegar ayer a los diputados por el señor Eduardo C. Liaudat, se establece que el consumo de vino en el país oscila en unos 5.500.000 de hectolitros. El presupuesto de Mendoza para el año 1935 prevé una salida de 1.800.000 y pico de cascos de vino; podemos decir, entonces, que la región de Cuyo prevé la posibilidad de contribuir a ese consumo con 2.500.000 cascos de vino.

Sr. Vicchi. — Un millón ochocientos mil cascos.

Sr. Palacín (M.). — Un millón ochocientos mil Mendoza y 600.000 San Juan.

Tengo una carpeta preñada de pa-pelos, pero quiero prescindir de ellos, y en la medida de lo posible quisiera

introducir en este Parlamento la práctica de hablar sobre la base de una elaboración hecha con papeles, pero dejando los papeles de lado para no prolongar demasiado los discursos.

Sr. Godoy. — Estamos de acuerdo.

Sr. Palacín (M.). — Muy bien, en algo estamos de acuerdo.

¿En qué medida contribuye a proveer el consumo de vino del país la vitivinicultura de Santa Fe, de Córdoba y, sobre todo, de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué estadística fidedigna tenemos de esa producción vitivinícola que se ha desarrollado a favor de los impuestos con que las de Cuyo han gravado a sus vinos y han arruinado sus industrias? No hay estadísticas ciertas. Considero fidedignas las estadísticas de Mendoza en lo que se refiere a exportación de vinos y también doy crédito a las estadísticas de San Juan. Me merecen absoluta fe las estadísticas de Río Negro. Pero me parece que la vitivinicultura de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires ha de contribuir en proporción muy superior a la sospechada al abastecimiento del consumo de vinos en nuestro país. Esa industria se desarrolla — y en esto tienen razón los habitantes de Cuyo — sin una severa policía de vinos, situación agravada por intereses políticos que paralizan la acción espontánea de esa policía. Y si a esta desconocida producción de vinos agregamos lo que representan esos aspectos secundarios de la crisis — que no tiene por que tratar el Parlamento — que son el estiramiento en el lagar y el estiramiento en los centros de venta al detalle, resultará que muy probablemente tenemos en el país el consumo de vinos necesario como para que vivan prósperas industrias sanas en los lugares que la naturaleza ha hecho privilegiados para el desarrollo de esta producción.

Mendoza ha combatido, apelando aún al dumping, a la vitivinicultura de Río Negro que es, probablemente, desde el punto de vista comercial la más honesta, y desde el punto de vista in-

dustrial la que debe servir de modelo para la industria de todo el país.

El plan que ahora se nos propone consiste en esto: destinar 15.000.000 para una problemática substitución de cultivos, en primer término. Aunque sea un aspecto secundario del problema, cabe preguntar cómo se certificará, cómo se controlará esta substitución de cultivos, para que no sean estos 15.000.000 regalados a viñadores influyentes?

Todos sabemos que Mendoza, cuyo suelo constituía otrora un latifundismo de pastoreo, posee hoy un latifundismo viñatero. Y en todo este problema hay algún violento conflicto entre los dos aspectos capitales de esta industria, entre el aspecto puramente industrial y el aspecto agrícola, que en Mendoza se manifiesta bajo la forma de latifundios en poder de la clásica oligarquía mendocina. Y no se ofendan los señores diputados por la calificación: hay un ministro que se jacta de descender de un personaje de la oligarquía argentina.

Hay otros 15.000.000 que se destinarán al embargo de una parte de la producción de vino; y se establece la obligación de los embargados de comprarla, cuando la junta lo decida y en las condiciones que la junta fije cuando ha de ofrecerse nuevamente al mercado. Pero, ¿qué otra cosa era el programa de la Sociedad Vitivinícola que está en liquidación? ¿Qué otra cosa sino el embargo del 50 ó 60 % de la existencia de vinos, que quedaban en la bodega de sus propietarios originarios, que se adquiría a 5 ½ centavos el litro y que se obligaban a recomprar a 14 ó 15 centavos el litro?

Sr. Vicchi. — Ahí está la diferencia fundamental.

Sr. Palacín (M.). — La diferencia fundamental está en que la prima, la diferencia entre 5 ½ centavos y 14 centavos, se ha reducido, en este caso, a 1 centavo, pero que como ella se distribuirá sobre todo el consumo de vino del país y no solamente sobre la producción de Mendoza y de San Juan, esa prima equivale, naturalmente, a una

prima de 2 centavos o más sobre la producción de la zona cuyana. Supongamos lo mejor para no ser pesimistas.

¡Qué rosea de reyes, señores diputados de la región de Cuyo, les depara el año próximo a la región que ustedes representan aquí! Después de la unificación de impuestos internos, ¡30.000.000 de pesos para subsanar las deficiencias de aquella industria! Supongamos, señor presidente, que se eliminan 15.000 hectáreas de viña, que, según creo, son las calculadas en el despacho, y que el embargo de las existencias por valor de otros 15.000.000 de pesos más, determine un precio para los consumidores que resulte lo suficientemente remunerativo para los señores industriales de Cuyo, como para poder defenderse de la deuda de pesos 188.000.000 que gravita sobre esa industria, en sus aspectos industrial y agrícola, lo que significa un servicio que pesa, según el señor Liaudat, con un 24 % sobre el costo del vino en bodega.

¿Qué ocurrirá si lográramos salvar una vez más a la industria vitivinícola de la región de Cuyo? Ocurrirá que pasado el susto, comenzarán de nuevo las vidas rumbosas, los préstamos generosos, y con cualquier motivo, dentro de poco el país tendrá nuevamente planteado el problema industrial de esa provincia, porque no se ha ido al fondo, porque esto no significa un programa de acción que pueda colocar a esa producción sobre las bases que ella reclama para ser una industria digna de la defensa nacional, de la solidaridad nacional, y una industria realmente del pueblo cuyano.

La región del Río Negro, que con sus 250.000 cascos de vino no ha constituido la desgracia de la vitivinicultura nacional, nos da estos datos realmente laudables: promedio de superficie de los viñedos, 4 hectáreas de extensión. Un viñedo de 15 hectáreas ya califica a su poseedor como un feliz mortal privilegiado de la fortuna.

Sr. Vicchi. — ¿Cuál es el precio de la hectárea de viña en Río Negro, señor diputado?

Sr. Palacín (M.). — Estoy acorazado contra las preguntas secundarias que tiendan a complicar este problema.

Sr. Vicchi. — El señor diputado se me escapa por la tangente. Le he hecho una pregunta concreta.

Sr. Palacín (M.). — Y yo le pregunto al señor diputado: ¿cuánto vale una hectárea en Mendoza?

Sr. Vicchi. — Yo le voy a dar el dato inmediatamente al señor diputado. En las actuales circunstancias, en las mejores zonas no se puede pagar por hectárea más de 4.000 pesos, y por consiguiente, 15 hectáreas, si las matemáticas no me fallan, importan 60.000 pesos. ¡Vaya una gran fortuna!

Sr. Palacín (M.). — Es superior a Einstein en materia de cálculos rápidos.

Sr. Vicchi. — Tengo más precisión, porque quizá conozco el problema mejor que el señor diputado.

Sr. Palacín (M.). — En Mendoza, en cambio, la superficie media de los viñedos, es de 15 hectáreas, y aun cuando hay una cantidad de miles de viñedos de 5 a 10 hectáreas, no es menos cierto que las cuatro más grandes bodegas del mundo poseen viñedos que las califican como establecimientos de desarrollo anormal dentro de nuestro país. Quiero hacer notar la monstruosidad de ese desarrollo, porque ninguna industria puede enorgullecernos por el hecho de ser la más grande del mundo, por presentar las concentraciones de capital más grandes, pues todo lo que esté en desproporción con el país significa un estado patológico, como diría un médico.

En Mendoza, la viticultura nos ofrece este aspecto que el Parlamento debe tener en cuenta cuando compromete la solidaridad nacional y 30.000.000 de pesos: es una viticultura hecha a base de un proletariado, en este momento, miserable, hecha a base del contratista, que en este mismo trabajo del señor César Liaudat...

Sr. Biancofiore. — Se han enriquecido los contratistas. Es una afirmación falsa.

Sr. Palacín (M.). — En este mismo trabajo...

Sr. Biancofiore. — Hay contratistas que eran peones y son riquísimos.

—Suena la campana de orden.

Sr. Presidente (Ferreira). — Ruego al señor diputado por Santa Fe que no interrumpa.

Sr. Palacín (M.). — Si el señor diputado Biancofiore es un vitivinicultor de Santa Fe, ¿por qué se enoja cuando se dicen estas cosas de Mendoza?

Sr. Biancofiore. — Habla de lo que no sabe; por eso le contesto.

—Suena la campana de orden.

Sr. Presidente (Ferreira). — Ruego al señor diputado que no interrumpa. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Palacín (M.). — Decía que la viticultura de Cuyo se califica por la presencia de un contratista que según se establece en el trabajo a que me vengo refiriendo, está malísimamente remunerado en comparación con el de Río Negro.

Sr. Vicchi. — Si me permite el señor diputado, sin ánimo de molestarlo, para evitarme una larga repetición de argumentos...

El señor diputado sabe perfectamente que la afirmación que ha hecho el señor diputado Biancofiore es exacta: casi todos los industriales de Mendoza, casi todos los propietarios de grandes bodegas, han empezado siendo trabajadores.

El cuadro que el señor diputado señala revela uno de los efectos de la crisis violenta que sufre la provincia. La baja remuneración actual de los contratistas es justamente una consecuencia del empobrecimiento de la industria vitivinícola. En cambio, en otras épocas, esas remuneraciones han dado tanto margen que sobre su base los trabajadores se han hecho propietarios.

Sr. Palacín (M.). — Acepto que la actual situación de la industria, naturalmente, determine el fenómeno de una baja remuneración de los trabajadores

que en ella intervienen; pero yo quisiera que los señores diputados por Mendoza y por San Juan, que personalmente me merecen la mayor estima, — ¿por qué no he de decirlo? — comprendan el propósito de mis palabras.

He visitado la región de Cuyo en distintas ocasiones. He admirado su progreso, me he extasiado con sus bellezas y he apreciado la hospitalidad de sus habitantes; desearía para esas regiones una prosperidad perenne; quisiera contribuir en la medida de lo que fuera posible al modesto voto de un diputado a esa restauración; estoy dispuesto a sacrificar la solidaridad nacional, en lo que de mí depende, en beneficio de esas provincias. Creo que la República ha de ser una; creo que no deben de haber provincias pobres y capitales ricas, pero para lograrlo es menester que comprendamos la necesidad de reiniciar rutas...

Sr. Vicchi. — En eso estamos.

Sr. Palacín (M.). — ...de modificar políticas, y no volver sobre una política cuyas consecuencias estamos palpando. Desearía, ya que la Cámara va a votar — porque las suertes están tiradas — 30.000.000 de pesos que pagará el pueblo argentino, que ellos fueran la piedra fundamental de la construcción de un nuevo edificio, es decir, que la industria vitivinícola cuyana se aproximara al pueblo y se alejara de ese aspecto que nos ha ofrecido hasta ahora y que compararía yo con el famoso episodio de Sansón: un templo magnífico, con columnas monumentales, al que el desesperado habitante que en él se encuentra desearía echar abajo para perecer aplastado por sus ruinas. Para esto es necesario decir patrióticamente la verdad; es necesario que los recursos de la Nación, que los dineros del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional no sean empleados, cada vez más, para salvar créditos otorgados en momentos de especulación.

El señor diputado por Mendoza, ha dicho que una hectárea de viña en la zona privilegiada vale actualmente unos

4.000 pesos; pero en la Cámara de Mendoza se ha denunciado y no ha sido desmentido, que ha habido Banco que en otra época aceptó una declaración por valor de 10.000 pesos y otorgó créditos en proporción. Ese es el problema. Son los bancos oficiales y privados los que ejercen influencia sobre nosotros para obtener la salvación de sus créditos más que la de la población cuyana.

—Ocupa su banca en el recinto, el señor ministro de Agricultura, ingeniero Luis Duhau.

Haré una digresión que conceptúo ilustrativa para los señores diputados que no han estudiado a fondo este problema. Cada vez que los bancos salvan a la industria lo hacen cargándola con millones de pesos en concepto de intereses. En Mendoza todo se hace con papeles, con pagarés escalonados a través de un año, que se descuentan pagando intereses, que significan nuevas y gravosas cargas para el pueblo de Cuyo, y, por reflejo, para el pueblo de la República. En cambio, en Mendoza, la constitución de cooperativas de modestos propietarios de viñas para elaborar sus vinos puros, generosos, tonificantes en la medida que lo sean, no encuentran el apoyo ni siquiera de las instituciones oficiales; y esto ha sido señalado en estudios concienzudos, imparciales, no realizados por un miembro del sector socialista, al cual siempre se le vetará por representar un criterio determinado, sino por una institución como es el diario «La Prensa», que es defensor del sistema de producción en que vivimos; que es un honesto y valiente defensor de la economía de la Constitución nacional, y ha sido «La Prensa» quien señaló la mezquindad de las instituciones de crédito oficiales para las cooperativas que se quisiera organizar dentro de la ley de la materia, frente a la generosidad, que compromete los intereses de esos bancos oficiales y los intereses del pueblo argentino para industriales que, en el mejor de los casos, habrían sido imprevistos y

tendrían que cargar con las legítimas consecuencias de su imprevisión.

Este programa, que nosotros no podríamos, seguramente, reformar en toda su extensión, debe, por lo menos, contemplar este aspecto: promover la constitución de cooperativas para la elaboración y venta de vinos por los viñadores sin bodega, dentro de las disposiciones de la ley de la materia.

El problema en Mendoza se complica por la existencia de unos 3.000 viñadores sin bodega. Los industriales, al mermar la demanda de ese producto, poseedores de viñas propias, legítimamente, no como lo proclaman los terratenientes viñadores, desde luego, elaboran primero su uva; si la demanda excede su propia producción, entonces se apela a los 3.000 viñadores sin bodega, o a las 35.000 hectáreas de viña sin bodega para elaborar. Esto plantea otro problema relacionado con este programa.

Hay en este proyecto una disposición que yo conceptúo conveniente y que es la de autorizar a esta junta para fijar la época de la vendimia, a efectos de que no se haga en forma tardía y que los caldos no tengan una graduación alcohólica tal, que permita la agregación de agua y haga necesaria después la agregación de ácido tartárico o sulfúrico. ¿Las bodegas podrán elaborar simultáneamente toda la uva de Cuyo? Este problema se plantea por la presencia de una tan grande cantidad de viñadores o superficie de viña que no tiene bodegas propias para elaborar sus caldos. Esta es otra característica de la industria vitivinícola de la zona cuyana, sin parangón en el mundo, como no lo tenga en Argelia, que yo no creo que lo tenga.

Frente a este espectáculo, ahí está el modesto territorio de Río Negro indicándonos la política a seguir; viñadores, propietarios viñadores asociados en cooperativas para tener sus propias bodegas, para proveer a la colocación de sus productos, industria democrática, industria vinculada a los habitantes del territorio, industria digna, a pesar de la diferencia de principio que

sobre 13 grados de alcohol podamos tener, industria digna de la solidaridad nacional.

A eso debemos tender, señores representantes de Mendoza. Y para terminar, porque he querido esbozar ideas generales que espero de los señores representantes de Mendoza y diputados de la Nación Argentina aceptarán como una contribución sincera para la solución de este problema, como una aspiración patriótica para sanear esta industria, quiero decir; he leído muchos papeles y estadísticas relacionadas con este problema; he seguido la obra intensa que el gobierno actual de Mendoza realiza y la de sus Cámaras representativas; he tenido la impresión del error, del prejuicio y, hasta del cálculo en esa obra. Pero no he podido sino admirar el enorme esfuerzo, la tesonera contribución a la solución de un problema que las regiones de Cuyo no han podido solucionar, y han entregado a esta Cámara para ver si es capaz de solucionarlo. Tengo el más grande respeto por esos hombres que han trabajado, gobernantes y representantes del pueblo en su modesta, pero tan digna como esta Legislatura. Que llegue hasta ellos la luz de la verdad, que sepan que para solucionar este problema han de iniciar una transformación de esta industria, y en vez de enorgullecernos con poseer las más monstruosas bodegas del mundo podamos enorgullecernos alguna vez al contemplar aquella hermosa región, al pie de su magnífica cordillera, habitada por hombres vinculados a los medios de trabajo, aun por el lazo de propiedad — con todo, soy colectivista —, felices, a cubierto de la especulación, sin pagar contribuciones terribles a los bancos que prestan cuando la industria da y reiteran los créditos cuando la industria flaquea, y sin necesitar recurrir al resto de la República pidiendo un auxilio que jamás hubiera requerido si esa industria hubiera sido conducida sobre carriles cuerdos y democráticos porque, como lo he dicho, las zonas de Cuyo y de Río Negro están destinadas a dar los

buenos vinos que tiene derecho a beber el pueblo argentino mientras el pueblo argentino quiera beber vino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Voy a contestar brevemente las observaciones que ha hecho el señor diputado Palacín, anticipando que buena parte de sus conceptos centrales coinciden con los que ha tenido en vista la comisión al expedir su despacho. Comenzaré rectificando dos o tres afirmaciones para entrar luego en la parte más sustancial de la exposición del señor diputado Palacín.

El programa propuesto por la comisión y por el Poder Ejecutivo se diferencia sustancialmente de las medidas anteriores tomadas por los gobiernos de Cuyo en que este es un programa de orden nacional y los otros fueron sólo acciones de esos gobiernos, dentro de la respectiva región, y que fracasaron por la razón fundamental de que trataron de curar por acción local un mal de orden nacional.

No importa el plan de este proyecto, — no podría ser éste el concepto — un regalo de 15.000.000 de pesos a viñadores influyentes. Es un absurdo afirmar tal cosa. Para demostrarlo me bastará hacer presente que este proyecto de ley se ha hecho indispensable precisamente en razón de la sanción de la ley de unificación de impuestos internos, y más con el propósito de contemplar la situación que esa unificación de impuestos crea a las regiones vitivinícolas que no son las de Cuyo, que con el propósito de favorecer a la región cuyana. Son los viñadores de Río Negro; de Jujuy, de Concordia y de otros puntos de la República los que desearán acogerse a los beneficios de este plan regulador en la parte referente a sustitución de cultivo, porque son los poseedores de viñedos de menor rendimiento económico y lógicamente serán los que tengan más necesidad de la ayuda de este plan federal para poder realizar la evolución hacia el cultivo de carácter más económico, de mayor rendimiento.

Se refería el señor diputado Pala-

cín a que los bancos oficiales acreedores de la industria vitivinícola cuyana son los que presionan más fuertemente para la sanción de este plan. Hay un error, las palabras del señor diputado Palacín me presentan la oportunidad de exponer en el recinto una de las razones fundamentales por las cuales la mayoría de la comisión no aceptó la indicación del señor diputado Noble para que formaran parte de la Junta Reguladora representantes de esos bancos, razón que expusieron en alguna oportunidad el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura: es muy probable que esos bancos tengan que contribuir a la normalización de la industria mediante la pérdida de parte de sus intereses; es muy probable que la Junta Reguladora tenga que encarrillar su acción en ese sentido.

Sr. Noble (J. A.). — Es una razón para que estén representados.

Sr. Godoy. — No, señor diputado, porque esta junta ya a tener funciones ejecutivas.

Sr. Noble (J. A.). — Temo que los intereses de esos bancos se sacrifiquen excesivamente a los intereses de los particulares. Es una razón en favor de la representación, y no en contra.

Sr. Pena. — Son propietarios en condominio.

Sr. Godoy. — Cada uno expone desde su punto de vista, señor diputado por Santa Fe. El señor diputado puede mantener su criterio; déjeme exponer el mío. La Cámara apreciará quién está en error.

Sr. Noble (J. A.). — Con mucho gusto lo escucho, señor diputado; pero he querido aclarar ese punto.

Sr. Presidente (Ferreira). — Ruego al señor diputado que no interrumpa.

Sr. Godoy. — De manera, entonces, que si los bancos pueden llegar a ser solicitados en el sentido que apuntaba el señor diputado Palacín, no es posible — para que no se produzca la situación de privilegio excepcional de que sean los únicos que no sufran ninguna pérdida en este reajuste integral de la industria — dar a los represen-

tantes de esos bancos la función ejecutiva de tomar las medidas tendientes a la contemplación de todos los intereses, máxime cuando, repito, existe la posibilidad de que esa junta tenga que encarrillar su acción en el sentido de pedir a esos bancos que hagan ellos también algún sacrificio en obsequio a la normalización integral.

Ha tocado después el señor diputado Palacín otro punto muy interesante, el referente a la contemplación de los intereses de los viñateros sin bodega que en la provincia de Mendoza poseen casi un tercio de los viñedos totales de esa provincia.

Es verdad que cualquier medida que tienda a facilitar la agremiación o la agrupación en forma de que puedan llegar a la industrialización y comercialización directa de sus productos, sería una medida de honda significación económica que tendería a consolidar la industria sobre bases realmente más firmes que las que hoy tiene.

Por ese motivo yo me proponía presentar un agregado a los incisos que contiene este artículo, que lo tengo aquí redactado y que coincide con el fondo de la proposición del señor diputado Palacín. La redacción que yo iba a proponer como un nuevo inciso del artículo dice que: «La Junta Reguladora estará facultada para promover la agrupación de los productores de uva en entidades cooperativas para la industrialización y comercialización directa de sus cosechas.»

Sr. Palacín (M.). — Al hablar de cooperativas, señor diputado, es conveniente que tengamos en cuenta la ley de la materia.

Sr. Godoy. — Efectivamente, es mejor puntualizar en la forma que indica el señor diputado.

Coincido, pues, con la parte más substancial de la exposición del señor diputado Palacín.

Sr. Corominas Segura. — Debo decirle al señor diputado Palacín que lo que él ha expresado respecto a la orientación de la industria vitivinícola ha-

cia las cooperativas de productores, es una aspiración constante del gobierno de la provincia. En el mensaje y proyecto de ley de 27 de Diciembre...

Sr. Palacín (M.). — Lo conozco; pero no me he referido, y le pido al señor diputado Godoy que me permita contestarle al señor diputado...

Sr. Godoy. — Con el mayor gusto.

Sr. Palacín (M.). — ... no me he referido al actual gobierno de Mendoza.

He leído todos los mensajes del gobierno de Mendoza y casi todos los Diario de Sesiones de la Legislatura, donde se trató ese problema, y en realidad veo allí, dentro de los intereses que se defienden, algunas tendencias sanas que conviene estimular; pero me he referido a la indiferencia rayana en hostilidad de las instituciones oficiales de crédito para promover la fundación de cooperativas dentro de la provincia. No me he referido a las autoridades de Mendoza.

Sr. Corominas Segura. — Deseo decirle que en ese proyecto de ley el Poder Ejecutivo de Mendoza se proponía la construcción de seis bodegas regionales con destino, justamente, a la elaboración de la materia prima de los viñateros sin bodega, y en primer término daba derecho para utilizar esas bodegas regionales a las asociaciones cooperativas de viñateros. Con el mismo criterio he tenido el honor de presentar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre creación de la Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola para que, como organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, atendiera la fase industrial y comercial de esta riqueza de Cuyo.

Sr. Palacín (M.). — Eso no me gusta tanto.

Sr. Corominas Segura. — Y en el inciso m) del artículo 6º, proponía la creación de las corporaciones de productores.

Sr. Palacín (M.). — Cooperativas, es el término que me gusta. Corporaciones las hay funestas.

Sr. Corominas Segura. — De manera que no es ese un criterio desconocido para nosotros y nos alegramos que en

algún momento llegue a convertirse en realidad.

Sr. Godoy. — Prosigo, señor presidente.

Decía que iba a proponer en el momento oportuno una iniciativa coincidente con el propósito enunciado por el señor diputado Palacín, recogiendo conceptos e ideas que, como muy bien lo han puesto de manifiesto mis colegas los doctores Corominas Segura y Vicchi, están en el ambiente de Mendoza y en especial en la mente de sus actuales gobernantes, desde tiempo atrás, tendientes a propiciar la creación y el funcionamiento de cooperativas de productores para que ellos, así unidos en un haz, puedan competir lealmente con los grandes potentados de la industria y no estén supeditados en algunos casos a la buena o mala voluntad del bodeguero, que les compra, o no, su producto, según sus conveniencias personales, y no de acuerdo a las necesidades del consumo o a los intereses generales.

Me movía también a proponer ese agregado otra consideración, que ya dejé en parte esbozada en mi exposición de ayer. Dije que es muy probable que el consumo nacional recupere un nivel tal, que en poco tiempo más podamos tener la convicción de que la medida relativa a la extirpación o sustitución de cultivos sea poco menos que innecesaria, y entonces del fondo regulador quedaría libre la cantidad suficiente para atender otras medidas y la que desearía indudablemente tener la preferencia es esta: la de estimular la creación y el funcionamiento de esos organismos que agrupen a los cultivadores sin bodega.

Para no alargar más el debate, dejaré con esto, manifestado mi punto de vista sobre las observaciones que hacía el señor diputado Palacín, y creo que estaremos habilitados para entrar a votar.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Antes de hacer uso de la palabra, agradecería al señor miembro informante de la comisión, una aclaración sobre el alcance de la diferencia de

forma de este inciso del despacho con la forma que le había dado el Poder Ejecutivo a la primera parte del artículo 2º.

En el proyecto del Poder Ejecutivo se habla, únicamente, de la facultad de la junta para otorgar indemnizaciones equitativas, a fin de promover la substitución de la vid vinífera por otros cultivos. En cambio, en el despacho de la comisión, se la faculta también para indemnizar o pagar primas por «la supresión, en la medida indispensable», de la vid vinífera, y, luego, para su substitución por otros productos. Agradecería al miembro informante indicara los motivos de la modificación.

Sr. Godoy. — Con el mayor gusto, señor diputado.

La diferencia existe porque cuando se hizo el debate en la subcomisión y luego en la comisión, se puso en claro el alcance de la disposición proyectada por el Poder Ejecutivo, que llegaba hasta admitir o proponer la supresión, la extirpación de vid para ser, desde luego, substituída por otro cultivo o para dejar el terreno con los cultivos más elementales como sería, por ejemplo, el de alfalfa, o con cultivos de carácter transitorio; en tales casos la indemnización tendría que variar. Cuando la extirpación de la vid sea con el objeto de ser substituído por otros cultivos costosos, como por ejemplo, la plantación de árboles frutales, tendrá que ser mayor la indemnización para estimular esa clase de reducción del área vitivinícola.

Ahora, cuando la extirpación de la vid se limite a arrancar cepas para dejar el terreno apto para siembras o cultivos anuales, naturalmente la indemnización deberá ser de menor monto. Por eso se quiso poner en forma expresa y clara, para que no hubiera ambigüedades, la expresión «en la medida indispensable».

Sr. Bunge. — Continúo, señor presidente.

Me complace la franqueza de la aclaración del señor miembro informante. Quiere decir que el alcance de

este inciso, que es el eje de la ley, significa poder hacer retrogradar la agricultura mendocina a más de un siglo de distancia, para mantener el privilegio de la industria vitivinícola en la época de crisis a que la ha conducido el proteccionismo, que le ha dado un desarrollo exagerado, artificial.

Se quiere favorecer así la substitución por alfalfares, de plantaciones que son una admirable síntesis del trabajo posiblemente de varias generaciones. Eso me parece deplorable. Mendoza hace un siglo era un oasis, alfalfado; con algunos cultivos frutales y alguno que otro viñedo.

Sr. Godoy. — Debe saber el señor diputado que el terreno no admite económicamente otra clase de cultivos.

Sr. Bunge. — Esa es la lección, precisamente, que quería sacar.

Llegamos así a una lección de cosas clarísima, de la involución a que conduce el proteccionismo desenfrenado en cualesquiera de sus formas.

Hay una anécdota que circula en uno de los países que han sufrido crisis de superproducción que expresa admirablemente el círculo vicioso a que conduce el proteccionismo exagerado de un cultivo, cualquiera sea. Se le pregunta a un campesino por un viajero: ¿a qué siembra trigo, si se dice que sobra? Para engordar cerdos, señor; el gobierno lo obliga a vender únicamente a fin de engordar cerdos. ¿Por qué está prohibido utilizarlo para producir pan? Porque no hay bastante gente para que pueda comerlo. ¿Por qué no hay bastante gente que pueda comer pan? Porque hay exceso de trigo. ¿Qué se hace con los cerdos engordados con ese trigo que sobra? El gobierno hace la matanza de esos cerdos para producir con ellos abono. ¿Qué se hace con ese abono? Se vende a bajo precio a los agricultores para que vuelvan a producir trigo y sigan engordando cerdos a fin de que puedan volver a producir abono, y así sucesivamente.

El proteccionismo del vino, como el del azúcar en el país, es el que ha en-

cerrado a las economías de esas industrias en un círculo vicioso del que se quiere salir, pero del que no será posible salir con esta ley.

No sólo me refiero al proteccionismo aduanero, sino al monopolio regional creado por el fuerte derecho a los vinos, que trajo como consecuencia que las regiones que gozaban de ese monopolio se creyeran facultadas para arrancar a todos los consumidores del país un tributo destinado a fomentar esa industria con obras públicas importantes, como las obras de irrigación mendocinas, como los caminos, que han facilitado la extensión del cultivo de la viña, porque sólo se pensaba que era el que más producía, y por ser el que más interesaba al terrateniente más influyente, era el más favorecido por los bancos oficiales en materia de crédito.

El proteccionismo determinó, por el fomento del monopolio, la monocultura, la degradación de la agricultura mendocina en el sentido de uniformarla para producir uva para vino exclusivamente. Pero como al mismo tiempo se creía disponer de un campo de consumo ilimitado, a causa de la anarquía característica de nuestro régimen individualista, que hace emancipar a la producción del consumo, que hace que los productores no tengan en cuenta el crecimiento normal de la capacidad de consumo, ese monopolismo no sólo favoreció la extensión excesiva de los viñedos sino también el llamado estiramiento del vino, con un eufemismo amable que da una noción falsa de la realidad. Está documentado que en años como 1927, en que se perdió casi la mayor parte de la cosecha en Mendoza, la producción de vino disminuyó relativamente poco, sin proporción con la disminución de la cosecha.

Sr. Vicchi. — No es exacto. La responsabilidad de eso la tienen los gobiernos que no ejercieron medidas de regulación.

Sr. Bunge. — Exactamente; no reprocho al gobierno actual.

Sr. Vicchi. — En el año 1932...

Sr. Bunge. — En ese año la producción fué proporcional. Es lo que iba a decir; no sea tan sensible el señor diputado.

Sr. Presidente (Ferreira). — Ruego a los señores diputados que no dialoguen.

Sr. Bunge. — El señor diputado me ha interrumpido...

Sr. Vicchi. — Pido disculpas.

Sr. Bunge. — ... cuando iba a decir precisamente que el final de embriaguez originado por la crisis estaba produciendo un saneamiento de la industria. Estaba hablando todavía de la época de prosperidad, más ficticia que real, en que se creía que el consumidor argentino iba a soportar todos los abusos, tanto con respecto a la calidad de la producción como en cuanto a los excesos en la extensión.

Se ha arrancado, pues, un tributo al conjunto de los consumidores del país para determinar un desarrollo exagerado de los cultivos de vid y de la producción de vino; y el encarecimiento del producto ha determinado una contracción del consumo, acentuada sobre todo en períodos de crisis, y el consecutivo envilecimiento de los precios. En esa forma, la política que han seguido los sucesivos gobiernos mendocinos favoreciendo sistemáticamente la extensión de los cultivos de vid, ha resultado contraproducente para la propia industria que se quería favorecer. Y vemos ahora que, como en el caso de cultivo de trigo para engordar cerdos que se transformarían en abono para nuevos cultivos, se ha exigido un tributo al consumidor argentino durante tres décadas para aumentar la extensión de los viñedos y ahora se les exige nuevamente tributo para destruir esos mismos viñedos.

Por supuesto, que tratándose de un consumo superfluo que fácilmente se hace nocivo, porque sólo es inocente en límites estrechos, a mí no me alarma que se reduzca la producción de vino, aunque preferiría que se encareciera por el impuesto, que sería lo más indicado.

De manera que si la reducción del

cultivo de vid y de la producción de vino pudiera determinar una evolución progresiva en la agricultura de las regiones vitícolas, me felicitaría. Pero me alarma la declaración del señor miembro informante de la comisión, en el sentido de que la junta puede indemnizar la destrucción de viñedos para hacerlos retroceder a lo que eran esas extensiones hace más de un siglo: al cultivo de la alfalfa.

Sr. Corominas Segura. — No vendería, porque en las zonas de viñedos de Mendoza y San Juan la alfalfa no reditúa nada.

Sr. Bunge. — Es evidente que hay regiones en las que el cultivador está arruinado y si no se le ayuda positivamente no podrá transformar sus cultivos de viña dedicándose a frutales que tardan años en producir, con lo que la destrucción de los viñedos tendría un resultado deplorable.

Por esa razón, creo que es una mala medida la que propone la comisión de autorizar a la junta a pagar premios a la simple destrucción de viñedos, y no para pagarlos al objeto de su substitución por cultivos socialmente útiles y de rendimiento económico.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Roberto J. Noble.

En la forma en que está ese inciso puede tender, no digo que sea ése el propósito de la comisión, que ha redactado el proyecto, pero puede tender a consolidar intereses monopolistas forzosamente espurios, como son los de los grandes latifundistas, que han devenido tales a favor de la formidable concentración de capitales favorecida por el proteccionismo sistemático.

El señor diputado Palacín, sin precisar, ha dejado constancia del hecho de que la tercera parte de la superficie cultivada con vid en Mendoza es propiedad de unas pocas bodegas. Esa concentración se ha producido lo mismo en Tucumán a favor del proteccionismo azucarero, hasta que por razones políticas los propios señores del azúcar se

han sentido movidos a subvencionar a los pocos cañeros libres que quedaban, a fin de tener en ellos un apoyo político que estaban perdiendo en el proletariado y en el cañero proletarizado...

Sr. Jardel. — Está sumamente equivocado.

Sr. Bunge. — La pequeña propiedad está dividida, desmenuzada, casi pulverizada, diría; pero esto ocurre con una pequeña parte de la extensión sembrada con caña en Tucumán. Algo análogo ocurre en Mendoza con la vid, porque la mayor parte está concentrada con tal exceso que el propio gobierno mendocino...

—Suena la campanilla indicadora de la expiración del término.

Sr. Bunge. — Como he sido interrumpido, se me podrían descontar esos minutos y terminaría.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — La Cámara debe pronunciarse.

Se va a votar si se autoriza al señor diputado a continuar su exposición.

—Resulta afirmativa.

Sr. Bunge. — Yo invito a la comisión a que acepte en este inciso la forma que tiene el proyecto del Poder Ejecutivo, porque es la única manera de evitar que la agricultura mendocina retrograde a cultivos antieconómicos en las zonas ahora cultivadas con vid. Es la manera de favorecer la evolución de esa monocultura destinada exclusivamente al vino y llevarla a una policultura socialmente útil.

En ese sentido, si la ley tuviera el resultado de permitir la policultura sin hacer retroceder la cultura cuyana, podrá ser útil. De otra manera, puede ser un retroceso lamentable.

Nada más.

Sr. Pena. — Pido la palabra.

En el seno de la comisión señalé oportunamente que el proyecto del Poder Ejecutivo era tan precario que quizá hubiera bastado un solo artículo para resumir el propósito que lo informa. El artículo podría decir así: «Entréguese 30.000.000 de pesos al gobierno de la

Nación para invertirlos de la mejor manera que estime conveniente para resolver el problema de la crisis vitivinícola». Se me hizo presente por funcionarios que se encontraban en la comisión que, efectivamente, el articulado del proyecto del Poder Ejecutivo era algo por el estilo.

La comisión ha querido presentar el proyecto de una manera distinta, aparentemente más orgánica, haciendo enunciados por incisos, pero que no resuelven la cuestión.

Porque, ¿qué quiere decir: «otorgar indemnizaciones equitativas que promuevan la supresión, en la medida indispensable, de la vid vinífera o su substitución por uva de mesa o de pasas o por otros cultivos? Todos los señores diputados saben que si esto se ha de hacer, importará lo que ya hemos denunciado: una destrucción de riqueza, luego de haberse hecho todo este desarrollo a expensas del sacrificio impuesto al pueblo de la Nación para permitir la creación y el gran desenvolvimiento de esa industria.

Todos los señores diputados saben que las variedades de vid tienen rendimientos distintos; y entonces, ¿qué criterio será el que presida la supresión de viñedos si no hay ninguna regla para dar a esa disposición una aplicación concreta? Entre una unidad que produce 20 quintales y otra que produce 200, ¿cuál se ha de suprimir? Como hay superproducción, ¿habría que suprimir la de 200 y permitir la subsistencia de la otra en peores condiciones de producción?

Al pagarse las indemnizaciones, ¿qué criterio se va a tener? ¿Se pagarán al mismo precio todas las viñas suprimidas? Es conocido que ha habido algunas experiencias en esta materia. En Mendoza se quiso substituir la uva de vino por otros cultivos y se ofrecían primas de 1.500 a 2.000 pesos por hectárea. Y, ¿qué ha ocurrido? Precisamente lo contrario: que hubo miembros de la Sociedad Vitivinícola que teniendo ellos en los contratos esa prima de 1.500 ó 2.000 pesos de indemnización, cambiaron la uva de mesa que tenían por uva de vino. El hecho ocurrió en

Guaymallén y fué entonces muy comentado.

De manera que, ¿qué es lo que se va a hacer en esta materia? Me alarmo porque se trata de 30.000.000 de pesos y porque — según está documentado en publicaciones de corta data que he leído ayer — había en la provincia de Mendoza «numerosos industriales poco escrupulosos». Yo no sé si ahora habrán cambiado mucho esos industriales.

Por otra parte no se me oculta que estamos en Mendoza muy próximos a una elección; y, ¿qué se va a hacer con esos 30.000.000 cuando se trata de distribuirlos sin ninguna clase de limitaciones?

Si hay algo que en esta ley tiene fuerza legal es el impuesto y la prohibición de plantar viñas, a menos que sea mediante el pago de una multa de 1.000 pesos por hectárea. Ello significa que no se podrá plantar una hectárea de viña, porque ya existen plantaciones anteriores, aunque sean muy inferiores a las que habrían de plantarse.

Esas son las dos únicas disposiciones legales que tienen consecuencias previsibles y que son propias de la materia legislativa. Las demás son declinaciones de facultades, sin ninguna clase de garantías y sin la menor consecuencia práctica previsible como no sea la arbitrariedad permanente en que se debate esta industria y en la cual gravitan de una manera decisiva los intereses de los grandes bodegueros, que son los que en este momento tienen 1.000.000 de hectolitros de vino y que están pugnando desesperadamente por esta ley, para salir del negocio en momentos en que no andan muy bien. La ley es de un enunciado totalmente precario: no hay índices, no hay condiciones, no hay reglas de aplicación, y se faculta a esta comisión designada por el Poder Ejecutivo a realizar, sin conocimiento del Congreso, un plan de aplicación de 30.000.000 de pesos, de los cuales no tendremos más noticias que sus consecuencias.

Esperemos, sin embargo, que ellas no sean tan malas como las resultantes de las leyes anteriores. Por eso afirmo que, en esta parte, el enunciado de

la ley no da ninguna regla; deja libre todo al criterio absoluto de la comisión. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Y cuando la ley habla de indemnizaciones equitativas frente a propietarios que tienen que recibir algo, en virtud de la misma, creo que la equidad no es palabra que pueda expresar clara y correctamente el alcance de una transacción. Ya se sabe cuáles con las demasías de todo propietario cuando la ley le va a otorgar algo, si la misma ley no aprecia lo que tiene derecho a recibir.

Repito que este enunciado es precario, no dice nada; es un enunciado de facultades que importa una declinación de los deberes del Congreso que debe fijar, en todo caso, cuando se trata de la inversión de dinero, exacta y claramente cómo debe hacerse.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

Me creo en la obligación de dar a la Cámara los motivos en virtud de los cuales no aparece mi firma subscribiendo el despacho de la mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Integré la subcomisión especial que tuvo a su cargo el estudio particular de este proyecto de ley; hice en el seno de la misma algunas observaciones, en la única reunión a que tuve oportunidad de asistir, y ellas no fueron aceptadas, circunstancia que me indujo prudentemente a no firmar el despacho.

Uno de los aspectos del problema que me preocupó especialmente, es al que acaba de referirse el señor diputado Pena. En este inciso que estamos estudiando se acuerda a la Junta Reguladora constituida por tres miembros, un derecho y una facultad realmente extraordinarios: la de fijar por sí sola, como si fuera un tribunal, la indemnización que corresponde a los particulares que opten por ejercer el derecho que este inciso les acuerda. Lo considero un criterio sumamente peligroso que pueda llevar a extremos verdaderamente condenables. Tengo el más alto concepto de los funcionarios que van a entrar de inmediato a aplicar la ley; pero ello no significa que los legisladores dejen de prever la posibilidad de que las circunstancias cambien en un

futuro más o menos próximo. Esta junta se convierte en una especie de tribunal ad hoc ante el cual se presentará el propietario a decir que opta por el derecho de indemnización que le acuerda la ley. La junta, de conformidad con el texto legal, obrará con su propio criterio al pronunciarse sobre el monto a acordarse, sin más restricción que la que puede determinar la palabra «equitativa», puesta en la ley, palabra demasiado vaga y amplia que puede abarcar, por eso mismo, soluciones distintas. Por mi parte, prefiero, y en ese sentido propongo un agregado a este inciso, que en estos casos no sea la junta la que intervenga y resuelva en definitiva, sino el juez federal. Quiero rodear de toda clase de garantías, tanto el derecho del particular afectado como el de la Nación, porque en realidad los 30.000.000 de pesos los pagará el pueblo de la Nación, el pueblo consumidor, y no hay derecho a despreocuparse, por parte del Congreso, de dar a la correcta inversión de esos fondos la más completa y absoluta garantía.

Propongo que en el caso de las indemnizaciones, el juez federal respectivo debe actuar como tribunal arbitral, el cual, por razón misma de su domicilio, tendrá la facultad y posibilidad de tomar conocimiento directo de la propiedad que se pretende indemnizar y, por lo mismo, tener un criterio más acertado y correcto sobre el valor real de las mismas. Ese juez federal, obrando como tribunal arbitral, previo acuerdo de partes, podrá en breve tiempo dar una solución definitiva e inobjetable.

Hay que evitar a toda costa que sea la junta formada por tres funcionarios la que acuerde sin apelación las indemnizaciones. En todo caso de no prosperar mi indicación, podría entregarse esa facultad al Poder Ejecutivo de la Nación, cuya responsabilidad ante el Congreso establece la Constitución.

Además, pongámonos en el supuesto de que mañana se presente un número crecido de propietarios de las diversas provincias solicitando indemnización. La junta necesariamente debe disponer

a cuáles de esos propietarios acordará el privilegio de la indemnización; no es posible que si se presenta el 80 ó 90 % de viñateros del país, la junta esté en condiciones, con la suma que se le entregue, de acordarles indemnización a todos. Con la intervención del juez federal se pone un dique de contención para evitar esa avalancha de intereses particulares que llamarán a las puertas de la junta.

Esa junta podría también convertirse de la noche a la mañana en un poderoso instrumento político, porque el derecho de acordar indemnizaciones por sí sola y determinar a qué propietarios ha de otorgársele, es realmente un derecho exorbitante, que puede llevar a verdaderos abusos. Estos son los motivos que tengo para proponer el agregado que sé de antemano no ha de prosperar, pero que entiendo debo presentarlo, para cumplir con mi deber. Dice así: «Las indemnizaciones serán estimadas por el juez federal o letrado — porque pueden producirse casos en territorios nacionales —, haya o no acuerdo de partes, actuando como tribunal arbitral y siendo su resolución inapelable». Naturalmente, la resolución del juez sería obligatoria para el particular sólo en el caso de que así se acuerde en el convenio arbitral, pero la junta en ningún caso podría conceder sino la indemnización que el juez señala.

De este modo se concilia el derecho de la Nación, el de los particulares y el interés de todos en que este juicio no sea de duración demasiada prolongada.

Dejo así fundado el agregado que propongo al inciso a).

Sr. Repetto (N.). — Pido la palabra.

Deseo hacer una pequeña pregunta a la comisión, cuya respuesta tendrá, creo, mucha importancia para las ulteriores de esta ley. Quería saber si las indemnizaciones de que habla el apartado 1º del artículo 2º que se discute, podrán implicar la compra del inmueble.

Sr. Godoy. — Absolutamente no, en ningún caso.

Sr. Repetto (N.). — Esa es una cuestión que merece ser considerada y re-

suelta por una afirmación categórica y terminante de la comisión. Estas indemnizaciones, en ningún caso podrán implicar la obligación de adquirir el inmueble, porque, como lo acaba de decir el señor diputado por Catamarca, una cantidad de propietarios podría presentarse para ofrecer sus viñedos a otros fines, reclamando luego las indemnizaciones. Es una cuestión que, dado su carácter general, podría llevar a complicaciones muy serias.

Sr. Godoy. — No hay inconveniente.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

No quiero reproducir aquí el debate en general que, a mi juicio, en forma poco reglamentaria se trae nuevamente al recinto. Anoche hemos discutido el proyecto en todos sus lineamientos generales. Se han pronunciado extensos discursos por representantes de todos los sectores y no es la oportunidad de reproducir argumentos como refutación de los erróneos que se hicieron ayer y se repiten hoy, que han sido debidamente rectificados.

En la exposición del señor diputado Palacín, que la aprecio como una contribución estimable a la discusión de este proyecto, se han enunciado algunas ideas generales, que si el señor diputado hubiera leído mi exposición de ayer, habría advertido que coincide en algunos aspectos — pocos, es cierto — con las por él expresadas; pero, a la vez, se ha matizado esa exposición con algunos errores indudables, dos de los cuales rectificaré, creo que en forma perfectamente clara y convincente.

No voy a referirme a la similitud con el plan de la Sociedad Vitivinícola. Hay una diferencia tan substancial, que ya ha destacado mi distinguido colega, el señor diputado doctor Godoy, que es necesario decir esto: todo el informe del doctor Liaudat — el excelente informe como se lo ha calificado con toda justicia — encierra una crítica severísima a las medidas económicas de la Sociedad Vitivinícola, y propone en substitución otras medidas que son fundamentalmente distintas, y afirmo categóricamente que esas ideas centrales son las que es-

tán inspirando el proyecto que discutimos.

Sr. Palacín (M.). — ¿Si me permite el señor diputado?

He tenido el cuidado de calificar el trabajo del señor Liaudat, como excelente en lo que se refiere al análisis. En cuanto a las conclusiones, no las comparto.

Sr. Vicchi. — El señor diputado no juzgaría con equidad...

Sr. Palacín (M.). — Saco otras conclusiones.

Sr. Vicchi. — ... si no admitiera que las conclusiones a que llega el doctor Liaudat son substancialmente diferentes de las medidas adoptadas por la Sociedad Vitivinícola.

Sr. Palacín (M.). — ¿Si me permite el señor diputado una última interrupción?

Sr. Vicchi. — ¿Cómo no!

Sr. Palacín (M.). — El principio de la Sociedad Vitivinícola consiste en lo siguiente: el embargo del 60 % de la producción para evitar su oferta en el mercado y anular una cierta cantidad de uva...

Sr. Vicchi. — Pero el señor diputado se ha olvidado, y esto es substancial, que el plan de la Sociedad Vitivinícola establecía un precio para la uva de 4,50, que era evidentemente elevado e importaba un encarecimiento artificial del producto y establecía, también, un precio mínimo del vino, también elevado, y que encarecía el producto. Esa fué la causa fundamental del fracaso del plan de la Sociedad Vitivinícola aparte de su aplicación aislada en ciertas zonas. Y no quiero entrar a detalles, sobre lo que podría hablar horas.

Hay otra afirmación que deseo rectificar como representante de Mendoza, sobre todo en lo que concierne a la gestión del actual gobierno. Se ha dicho que la provincia de Mendoza realiza dumping en el mercado de vinos. Yo no sé qué sentido se da a algunas palabras. Entiendo por dumping hacer afluir mercaderías en condiciones especiales al mercado, para venderlas a un precio más bajo que el de los demás competidores. ¿Y cuáles son los argumentos que

se han dado para justificar ese dumping? Una ley a la que se atribuye concesión de primas acordadas a los productos de Mendoza para que puedan combatir con productores de otras zonas en condiciones favorables.

Formulo al señor diputado esta pregunta concreta: si la provincia de Mendoza hubiese derogado su impuesto de 5 centavos a la producción, tan duramente fustigado por la representación socialista, ¿habría eso merecido, o no, su aprobación? Creo que sí. Eso es lo que ha hecho la provincia de Mendoza: reducir su impuesto a los productores para que puedan vender en condiciones menos desventajosas en el mercado.

Sr. Palacín (M.). — ¿Me permite?

Sr. Vicchi. — Le voy a dar un argumento más concluyente.

Sr. Bogliolo. — Ese no tiene valor, porque era sólo para una determinada zona de la República.

Sr. Vicchi. — No, señor diputado; era para varias zonas del país.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Invito al señor diputado por Mendoza a dirigirse a la Presidencia.

Sr. Vicchi. — Quiere decir que la provincia de Mendoza ejercitaba el derecho de reducir sus impuestos.

Pero yo he dicho que voy a dar otro argumento más concluyente. Tengo aquí una estadística del costo del vino en diferentes mercados del país, y afirmo categóricamente que no hay ningún mercado en el que el productor de Mendoza esté en mejores condiciones, no obstante ser el que produce a más bajo precio.

Sr. Palacín (M.). — Debido al impuesto.

Sr. Vicchi. — Debido a muchas circunstancias, señor diputado. Pero eso significa la negación del dumping.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Señor diputado por Mendoza: si no desea provocar diálogos, le invito a dirigirse a la Presidencia.

Sr. Vicchi. — Sí, señor presidente. Voy a hacerlo.

Según este cuadro, en la Capital Federal, en pesos moneda nacional, el producto de Mendoza tiene un costo de

25,73; el de San Juan, 24,94; el de Río Negro, 22,20. En Bahía Blanca: el producto de Mendoza, 25,06, el de San Juan, 25,30 y el de Río Negro, 21,57. Sigue una larga lista. Solicito la inserción de este cuadro en el Diario de Sesiones. En él queda perfectamente demostrado que los costos en los puntos de destino son más altos para Mendoza en todas las zonas del país, y en este cuadro se ha hecho el descuento por la reducción de impuestos a que me he referido antes.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Si hay asentimiento, se insertará el cuadro en el Diario de Sesiones.

—Asentimiento. (1)

Sr. Vicchi. — El segundo argumento que se ha hecho es que se aplica una fuerte prima al consumo nacional, y es conveniente expresar concretamente que eso no es cierto. Con la nueva ley de unificación de impuestos internos y con la sobretasa que se sanciona, los impuestos al vino se reducen en todas las provincias. Habrá posiblemente una excepción, la de la Capital Federal; pero recuerdo a los señores diputados que en la Capital, más del 80 % del consumo es de vino de Mendoza, y ese vino de Mendoza paga en la Capital Federal, aproximadamente, los seis centavos que se establecen por el nuevo gravamen.

Con esto dejo de referirme a la parte general, a los aspectos generales que se han tocado, y voy concretamente a la discusión de la ley en particular y a las observaciones que se han formulado por el señor diputado por la Capital y por el señor diputado Ahumada.

Sé dice que la disposición es un poco vaga y que no ofrece suficiente garantía. Empiezo por declarar que la representación de Mendoza desea que se tomen todas las medidas de garantía necesarias, a fin de que la aplicación de la ley sea absolutamente correcta y no se preste a ningún abuso. Creo que las disposiciones de la ley son una garantía real. Obsérvese que se trata de fun-

cionarios que constituyen una junta nombrada con acuerdo del Senado, funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo. Por consiguiente, el Congreso está habilitado para pedirle en cualquier momento rendición de cuenta de sus actos y para adoptar las decisiones que sean pertinentes.

Si se quiere agregar una garantía más se puede establecer que las indemnizaciones que se resuelvan pagar a los productores sean sometidas previamente a la aprobación del Poder Ejecutivo de la Nación, uno de los poderes de gobierno cuya responsabilidad constitucional es innecesario explicar.

Sr. Dickmann (E.). — ¿Me permite una pregunta el señor diputado?

¿Cree el señor diputado que habría necesidad de destruir muchos viñedos?

Sr. Vicchi. — En ese sentido he expresado mi opinión en la sesión de ayer. Creo que va a ser necesario destruir un cierto número de hectáreas de viñedos; pero me parece que el cálculo de 15.000 es exagerado.

Sr. Dickmann (E.). — A mi entender, la destrucción podría ser, señor diputado, por la simple acción del tiempo, si no se aumentan los plantíos. Cada año se elimina una buena cantidad de viñedos en la provincia, y ahora, que se han unificado los impuestos en el país, hay que admitir que el consumo tal vez aumente, creo, pues, que no habría necesidad de recurrir al procedimiento antieconómico y destructivo de eliminar viñedos. De manera que por la simple acción del tiempo, con no plantar más, no habría necesidad de destruir viñedos que, como decía, es una acción siempre antieconómica.

Sr. Vicchi. — Indudablemente que yo desearía que el señor diputado tuviera razón; pero los estudios que se han verificado sobre bases serias señalan un desequilibrio tan grande que, indudablemente, no nos podemos hacer ilusiones al respecto. He citado en la sesión de ayer las cifras de las estadísticas del informe del doctor Liaudat. La capacidad de producción corriente se calcula en 8.300.000 hectolitros por

(1) Véase pág. 720.

año. Calculando lo que queda compensado por las mermas, hay un excedente anual sobre el consumo que es de 44 litros per cápita.

Sr. Dickmann (E.). — Es el mínimo.

Sr. Vicchi. — No, ha habido menos, habiéndose llegado a 35. Pero ahora está aumentando el consumo.

El desequilibrio actual sería de 3.600.000 hectolitros y aun admitiendo que se llegara — continúa diciendo el informe — al consumo llamado normal que califica de 58 litros por habitante, el desequilibrio sería de 1.300.000 hectolitros, o sea el 20 % de la producción.

Ahora bien; deseo expresar que no se pueden dar cifras rígidas para la indemnización, porque varían de acuerdo a las zonas y a los estados de los viñedos. Hay viñedos de condiciones extraordinariamente antieconómicas, que producen 30 quintales por hectárea o cantidades aproximadas y esos viñedos indudablemente no pueden significar nunca una ventaja económica para quien los explota. Hay otros, en cambio, que tienen mayor producción; en fin, hay una serie de factores que deberán ser estudiados por la junta para establecer debidamente las indemnizaciones a acordarse.

Le preguntaría ahora al señor diputado si no le parece suficiente la aprobación de esas indemnizaciones por el Poder Ejecutivo, dada la facultad constitucional que tiene, porque su proposición de someterlas a la aprobación del juez federal, importará la iniciación de una serie de trámites administrativos ante un funcionario totalmente extraño al asunto, lo que va a producir perjuicios en la práctica y entorpecimientos, además del encarecimiento que significa esa tramitación.

Sr. Corominas Segura. — Además el juez por sí solo no puede hacer esas evaluaciones, pues debe basarse en peritajes para fundar su criterio, de manera que los gastos judiciales podrían insumir el monto de la indemnización.

Sr. Palacín (M.). — Pido la palabra. El señor diputado Vicchi encontró

dos inexactitudes en mis afirmaciones.

Sr. Vicchi. — Dos errores, señor diputado.

Sr. Palacín (M.). — Dos errores gruesos.

Sr. Vicchi. — No los he calificado. Dos errores.

Sr. Palacín (M.). — Yo admiro las condiciones de abogado del señor diputado. Insisto en que el plan que se estableció en el artículo 2º del despacho es, en esencia el mismo de las sociedades vitivinícolas: embargo de parte de las existencias o de la producción, e inutilización de parte de la producción para restringir la oferta y conseguir mayor precio. El señor diputado, como hábil abogado, cree que esa afirmación se destruye porque aquí la prima, en vez de ser 4½ a 5 centavos, es de 1 centavo, y porque todavía no conocemos el precio de reventa...

Sr. Vicchi. — Permítame una breve interrupción.

No hay tal prima. También se hace la manifestación — no recuerdo la frase del señor diputado, elegante, como suya — de que esto importaría una especie de Jauja para los productores. No. Es el principio de un largo período de convalecencia.

Sr. Palacín (M.). — Como Jauja, ¿ha dicho?... ¡Ya quisiera yo ser industrial del vino o dueño de viñedos.

Sr. Vicchi. — El tiempo le va a constatar.

Sr. Palacín (M.). — ¡Yo sé lo que significa eso! ¡Es algo muy bueno!

Sr. Vicchi. — Le pido al señor diputado que me permita una breve interrupción.

Afirmo que el tiempo demostrará que el señor diputado está profundamente equivocado. La industria se salva ahora de una bancarrota para entrar a un largo período de convalecencia muy lento. Perciba el señor diputado que todavía tenemos que recuperar lo que se llama el consumo normal, de 58 litros por habitante, y eso significa el esfuerzo de una serie de años y precios muy bajos porque, de lo contrario, la caída del consumo se produce nuevamente.

Sr. Palacín (M.). — Todavía no sabemos a qué precio revenderá la junta los vinos...

Sr. Vicchi. — Al precio del mercado.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — La Presidencia ruega al señor diputado por Mendoza que se abstenga de interrumpir.

Sr. Palacín (M.). — Para cualquiera que lea el despacho y conozca el plan de las sociedades vitivinícolas, resultará evidente que mi afirmación es exacta, aun cuando el impuesto que se fije ahora sea de menos centavos.

En lo que se refiere al dumping, señor diputado, dumping, es vender por bajo del precio de costo o pagar primas a determinada industria para que pueda conquistar un mercado. El dumping, se puede hacer privadamente, vendiendo a precio inferior al costo para conquistar un mercado, o con la intervención de los gobiernos que paguen primas a determinada industria para que conquiste un mercado determinado. Mendoza, por una ley, devolvía parte del impuesto a los vinos que salían, por ejemplo, para los puertos del Sur, con la declaración de ser vinos que se iban a exportar; pero es sabido, señor diputado — y no nos ocultemos estas pequeñas fallas morales: al fin de cuentas, hombres somos, y participamos de todas las debilidades de los hombres, como dijo el viejo poeta que usted conocerá —, que esos vinos llegaban a los puertos y volvían al interior de la provincia de Buenos Aires.

Y vean los señores diputados por Mendoza el absurdo que hay en todas estas medidas de defensa de la producción mendocina. Tenemos aquí un cuadro 22 del trabajo del señor Liaudat que dice: «Costo de producción de 100 quintales métricos de uva en una viña de rinde medio. En Mendoza: contratista, 83,80; sueldo fijo, 77,80; participación, 6. En San Juan: 94, compuestos por: sueldo fijo 64; participación, 30. En Río Negro, 165 pesos, compuesto por 125 pesos de sueldo fijo y 40 de participación.»

Sr. Vicchi. — Antes del año 1930 se han abonado en Mendoza sumas iguales y superiores.

Sr. Palacín (M.). — Señor diputado: cuando se leen cifras conviene proceder con cierta calma.

Voy a leer algunas cifras: primer costo: en Mendoza es de pesos 83,80; en San Juan, de 94, y en Río Negro, de 165. Tratamientos: en Mendoza, 11,10 pesos; en San Juan, 8; en Río Negro, 12,50, más caro que en Mendoza. Riego y Desagüe: en Mendoza, 6,70; en San Juan, 11,20, más caro que en Mendoza, y en Río Negro, 12,50, más caro que en Mendoza y en San Juan. Contribución directa, etcétera. Total de gastos de producción de 100 quintales métricos de uva: en Mendoza, 154,90 pesos; en San Juan 166, y en Río Negro la enorme suma de 243,80. Este es el costo de producción en una viña de rinde medio.

Costo del vino por hectolitro. En Mendoza, 649; en San Juan, 824; en Río Negro, 840, que continúa teniendo el más alto índice de costo.

Pero cuando el vino producido en esas condiciones tan favorables para Mendoza, se encuentra en bodega, nos encontramos con estos costos por hectolitro: para Mendoza, 20,09; para San Juan, 20,04, más barato, y para Río Negro, a pesar de su enorme costo de producción, 17,20, es decir, más barato que en San Juan y en Mendoza.

¿Qué es lo que hace tan caro el vino en Mendoza? Es un impuesto de 5,40, un envase de 6,20 y otros gastos de 2 pesos.

Estoy hablando del vino en bodega. Mientras que para el producto de Río Negro los impuestos no ascienden más que a 60 centavos, a 6,20 el envase y a 2 pesos otros gastos.

De manera que es el impuesto provincial lo que ha arruinado a la industria.

Sr. Vicchi. — No discutimos ese aspecto en este momento. Pero el señor diputado me contesta un argumento con otro.

Sr. Palacín (M.). — Es necesario, entonces, que convengamos en esto: de acuerdo con la sabia expresión de Miguel de Cervantes Saavedra: «Peor es meneallo.»

Sr. Bunge. — Me parece que es un error incorporar en el cálculo de costo la contribución directa, que no forma parte del costo de producción.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Simplemente para decir, en nombre de la comisión, que acepta la indicación hecha por el señor diputado Ahumada, de que en el inciso a) se agreguen las palabras «previa aprobación del Poder Ejecutivo», después de donde dice «para otorgar». De manera que la frase diría: «para otorgar, previa aprobación del Poder Ejecutivo, indemnizaciones equitativas», etcétera.

Esto es lo que puede aceptar la comisión por la razón que brevemente expondré. Las decisiones que se proponen a cargo de los jueces federales implicarían un número muy grande de juicios administrativos y tramitaciones judiciales, porque si hubiera que indemnizar 10.000 hectáreas, por ejemplo, esas 10.000 hectáreas por pertenecer a 40 ó 50.000 propietarios, significarían otros tantos casos que deberán ser sometidos a una decisión arbitral, lo que importaría una labor extraordinaria, y un engorro inadmisibles; mientras que el agregado que se acepta, significaría una garantía más en el otorgamiento de indemnizaciones.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el primer párrafo del artículo 2°.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — La Secretaría dará lectura del inciso a) con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

—Se lee:

- a) Para otorgar, previa aprobación del Poder Ejecutivo, indemnizaciones equitativas, que promuevan la supresión en la medida indispensable de la vid vinífera o su substitución por uva de mesa o de pasas o por otros cultivos.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Ahumada. — La comisión ha resuelto aceptar la modificación que yo propuse; de tal manera que por lo menos algo se ha conseguido.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el inciso b).

Sr. Bunge. — Este inciso podría ser de utilidad social si tuviera por resultado fomentar una industria de gran importancia higiénica y que no ha sido desarrollada todavía con inteligencia como para abrir un gran mercado de consumo, con ventaja para la salud de una gran parte de la población: me refiero a la fabricación de la llamada «miel de uva», jugo de uva concentrado a baja temperatura. Se trata de un producto de gran valor alimenticio y que tendría un consumo ilimitado.

Para contribuir por lo menos a abrir ese camino, propongo a la comisión que acepte un agregado aclaratorio, que impida comprar uva u orujo para destilarlos; y que después de la palabra «vinos» diga «o alcoholes».

Sr. Repetto (N.). — Yo deseo preguntar al miembro informante de la comisión, si según este inciso podría darse a la uva un destino útil, o si está excluida esa posibilidad.

Sr. Godoy. — Podría resultar que alguna de las aplicaciones de la uva no diera un resultado apreciable en dinero o que fracasara por la falta de medios para improvisar una nueva industria que, en suma, vendría a significar una pérdida de parte de la materia prima adquirida.

Podría tratarse de estimular la elaboración de bitartratos, para lo cual es bastante indicado el zumo de uva verde. Se substituiría así el ácido tartárico que se importa para uso de la industria; pero podría resultar que la elaboración de bitartratos en gran escala, afrontada de improviso, fracasara el primer año por falta de organización industrial y que entonces hubiera una pérdida en materia prima.

Pero en términos generales no es el propósito comprar la uva para tirarla.

En cuanto al agregado que propone el señor diputado Bunge, yo personalmente no tendría inconveniente en aceptarlo; pero me resulta difícil conocer en este momento la opinión de los demás miembros respecto de este punto que es un tanto delicado. Yo no sé si la Junta Reguladora podría entender que es útil destinar parte de la materia prima a la elaboración de alcohol.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

Deseo aclarar este punto: dentro del carácter general que se ha querido dar a la ley, el artículo expresa claramente que la junta podrá disponer la compra de materia prima con destino distinto a la elaboración de vino. Caben aquí todas las otras elaboraciones que económicamente sean posibles: la de alcohol, la de miel de uva, la de ácido tartárico. A mi juicio, en la ley no puede enumerarse taxativamente. Será la junta la que decida, de acuerdo con las posibilidades, los recursos de que pueda disponer, o las ventajas económicas, que la uva se destine a la elaboración de un producto o de otro. Dicha junta estará interesada en ello, en primer término. La uva podrá, asimismo, ser cortada y abandonada, sin dedicarla a elaboración alguna.

Por eso, creo que el artículo contempla las dos observaciones a que se han referido los señores diputados y las opiniones vertidas en este debate servirán de orientación a la junta para la acción a desarrollar.

Sr. Bunge. — Mi proposición tiende a evitar que pueda destinarse uva a la elaboración de alcohol.

Sr. Corominas Segura. — En ese caso tendrá que hacerse previamente vino.

Sr. Bunge. — No. Se podría comprar orujo y destilarlo.

Si el artículo expresara «uva», en lugar de «materia prima», no habría hecho la observación; por eso pido a la comisión que acepte la substitución de las palabras.

Sr. Godoy. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se votará el inciso en la forma que ha aceptado la comisión, de que se va a dar lectura.

—Se lee:

b) Para disponer la compra de uva con destino distinto a la elaboración de vinos.

—Resulta afirmativa.

—En consideración el inciso c).

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Pediré una explicación respecto a este mecanismo ingenioso. Sería interesante conocer cómo va a realizarse una operación de tantos millones de pesos.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Esa explicación está contenida en el mensaje del Poder Ejecutivo, que trae todos los antecedentes que ha podido tener a la mano el señor diputado. Sería inoficioso entrar en detalles. La adquisición de ese vino se hará con todos los recaudos que la junta deberá tomar para que sea obligatoria, de parte del bodeguero vendedor, la recompra del producto, cargando él con todos los riesgos y obligándose a ser el depositario de ese producto. De modo que la junta no correrá ningún peligro de tener el más mínimo «clavo», para usar la palabra gráfica.

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Declaro que ni de la lectura del mensaje, ni del texto del despacho ni de las palabras del señor diputado, surge con claridad el mecanismo tan ingenioso de esta disposición que compromete 15.000.000 de pesos, según la prorrata que se ha hecho. Supongo que el vino debe estar dentro de algunos recipientes en propiedad de los señores que son los que ahora lo tienen.

Las bodegas chicas, de las que había una cantidad discreta en Mendoza, en los años anteriores han desaparecido.

Sr. Corominas Segura. — No. ¡Qué han de desaparecer! Está equivocado.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Ruego al señor diputado no interrumpa.

Sr. Vicchi. — Se utiliza toda la capacidad de bodegas que hay en Mendoza.

Sr. Pena. — Las bodegas chicas que había diez años atrás, han sufrido una reducción considerable y sólo se han desarrollado las enormes bodegas de decenas y centenas de miles de hectolitros.

La operación que se plantea es ésta: se le daría a esos señores, dinero, y tendrían dinero y vino; serían los guardianes del vino. El gobierno pondría el ejército para el cuidado; ahora tiene un almirante y podría mandar una escuadra.

De manera, que en esa operación se compromete el crédito de la Nación; hay decenas y centenas de millones de pesos del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional y ahora se dará una suma mayor para esa operación en que se dice no se corre el mismo riesgo. No sabe la junta lo que pasará con el vino. ¿Sabe acaso la junta cuándo podrán recomprarlo los bodegueros? Se trata de una operación que no se explica satisfactoriamente por más vueltas que se le dé, y además hay una premura por salir del asunto que, a mi juicio, no le da seriedad a la iniciativa. No podemos menos de dejar constancia de nuestra protesta ante el texto de una ley que determina la disposición de 15.000.000 de pesos fuera de las formas corrientes y normales de las operaciones de crédito y que significará para la Nación un perjuicio enorme.

Ya hay quien dice e insiste mucho en que alguna parte de ese vino está en un estado tal que ya no sería vino, y cuando se lo vuelva a recomprar es evidente que el gobierno tendrá que aceptar que eso no es lo que era antes, y entonces tendrá el «clavo» que dicen que no habrá.

Sr. Ruggieri. — Deseo formular la siguiente pregunta: si de acuerdo con el mecanismo de este inciso, en ningún caso la junta tendrá facultad para ena-

jenar el vino a los que no son bodegueros.

Sr. Godoy. — No; ni siquiera a un precio menor del de adquisición.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

El plan destina 15.000.000 de pesos a la sustitución de cultivos y 15.000.000 a la compra de uvas. La inversión que se hará en la compra de vinos debe recuperarse íntegramente. Para eso la junta tomará todos los recaudos.

Hace pocos días tuve el placer de recibir en mi despacho al gobernador de la provincia de Mendoza, y me dijo: en lo que se refiere al vino, yo creo que la junta no tendrá necesidad de emplear un solo centavo, porque las instituciones bancarias estarán en condiciones de financiar la retención necesaria.

En la primera parte del inciso, se establece que se podrá comprar vino con la obligación para los bodegueros vendedores de retomarlos en época determinada; en la segunda parte se faculta a la junta para intervenir mediante préstamos prendarios. Ambas situaciones significarán para el productor de vino la obligación de mantenerlo en buenas condiciones. La afirmación que le ha llegado al señor diputado por la Capital, acerca de que el vino está en malas condiciones de conservación, será tomada en consideración por la Junta Reguladora, que adoptará los recaudos del caso.

Con el producto de la reventa del vino se comprará uva o se darán indemnizaciones para la sustitución de cultivos; luego, el capital que emplea la junta para la compra de vino, es un capital que íntegramente debe volver a la junta.

Sr. Pena. — Desearía que quedara constancia que el señor ministro opina que están de más los 15.000.000.

Sr. Ministro de Agricultura. — No, señor diputado. Fundamentalmente, los 15.000.000 de pesos son para sustitución de cultivos y para compra de uva. El capital empleado en la adquisición de vino se recupera a corto plazo y se

vuelve a destinar a los objetos fundamentales, que son, según acabo de decir, la sustitución de cultivos y la compra de uva. No puede haber pérdidas, entonces, en la compra y reventa de vino. Esa es la base del plan; de otra manera fracasará.

Sr. Repetto (N.). — Pido la palabra.

El señor ministro está en una disposición tan comunicativa que no puedo resistir a la tentación de aprovecharla y le voy a hacer dos preguntas. Esta recompra de vino a que se obligan los bodegueros, ¿es una operación que se realiza siempre con prenda agraria, vale decir que el bodeguero que ha recibido el importe del vino se hace depositario de ese vino y está dispuesto a devolver ese importe a la junta cuando decide venderlo?

Sr. Ministro de Agricultura. — Eso es. Ese es el criterio.

Sr. Repetto (N.). — ¿De manera que la operación se hace regularmente con prenda?

Sr. Ministro de Agricultura. — Con todos los recaudos.

Sr. Repetto (N.). — La junta podría, entonces, perjudicarse si la calidad del vino cambia.

Sr. Vicchi. — Carga con la diferencia de precio.

Sr. Ministro de Agricultura. — Y se garantiza un precio de recompra.

Sr. Repetto (N.). — Deseo saber si esta negociación puede tener como consecuencia el cambio de sistema de comercialización de la uva. ¿El bodeguero que ha vendido su vino a la junta con la obligación de recomprarlo después, se obliga a hacer efectivos los pagarés que él ha dado en pago de la uva con que ha hecho su vino? El sistema conocido en Mendoza es pagar la uva con cuatro pagarés escalonados de tres en tres meses. De manera que el bodeguero que hubiera vendido su vino a la junta recibiría todo el importe sin haber pagado tal vez el importe de la uva con que ha hecho ese vino.

Sr. Vicchi. — No puede ocurrir eso, porque si hay prenda agraria, que es la forma normal de hacer la operación para vender el vino, tiene que cancelar

la prenda, porque de lo contrario está disponiendo indebidamente de la mercadería.

Sr. Repetto (N.). — Explíqueme este hecho que no acabo de entenderlo. Si ha vendido su vino, ¿recibe o no el precio íntegro de manos de la junta?

Sr. Vicchi. — Se lo paga la junta.

Sr. Repetto (N.). — El bodeguero dueño del vino ha recibido el importe total del mismo, pero no ha pagado la uva ni la pagará hasta dentro de seis o nueve meses.

Sr. Godoy. — Se trata de la compra del stock existente, es decir, de la cosecha anterior.

Sr. Repetto (N.). — Eso lo dice la ley. En cualquier momento hay un excedente.

Sr. Ministro de Agricultura. — Yo le contestaría: si el bodeguero hubiera vendido libremente su vino y no a la junta, ¿sería responsable o no de los pagarés que ha subscripto?

Sr. Repetto (N.). — Claro que sí.

Sr. Ministro de Agricultura. — Bueno; la responsabilidad del bodeguero es intención de este plan aumentarla: ponerlo en mejores condiciones para poder hacer efectivos esos documentos dados en pago de la uva.

De manera que yo creo firmemente, señor diputado Repetto — salvo mejor opinión —, que este plan va a colocar a esos pagarés en una condición de seguridad que hoy no tienen dentro de esta plétora de vino que se ofrece en el mercado y que está llevando los precios a niveles que no permiten a la industria continuar sus actividades.

Sr. Repetto (N.). — Lo que quería expresar, señor ministro, es que esta medida permite al bodeguero retardar el momento de la venta, y mientras tanto él ha embolsado ya el importe de ese vino. Tiene todavía el derecho de venderlo cuando le llegue a su juicio la oportunidad.

Sr. Ministro de Agricultura. — ¿El que le ha comprado la junta?

Sr. Repetto (N.). — El que le ha vendido a la junta.

Sr. Ministro de Agricultura. — El plan de retención se desarrolla en esta

forma: el vino será vendido cuando la junta determine que el vino se puede vender. Ese es el compromiso. Si no, no habría plan de regulación en la oferta.

Sr. Repetto (N.). — Pero no lo venderá la junta.

Sr. Ministro de Agricultura. — Lo venderá el bodeguero, pero en el momento que la junta indique. Si no, la junta no podría regular.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar.

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Yo haría indicación para que la comisión acepte que este artículo se redacte en un solo párrafo. Para lo establecido en la primera parte, es evidente que no hay ninguna garantía y ninguna clase de condiciones. Podría establecerse, entonces, simplemente: «Para adquirir mediante préstamos con prenda agraria, con los recaudos que juzgue necesarios, los excedentes de vino», etcétera.

Sr. Rodríguez. — Que se vote.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar por partes, como se ha solicitado, el inciso c).

Se va a votar la primera parte.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la segunda parte.

Sr. Repetto (N.). — Pido la palabra.

Creo que la segunda parte podría votarse con una ligera modificación. En lugar de decir «Esta facultad podrá también ser ejercitada por la junta...», debería decir: «Esta facultad será ejercida por la junta mediante préstamos con garantía de prenda agraria, con los recaudos que juzgue necesarios». Porque como aquí se ha dicho que en todos los casos se requiere la prenda...

Sr. Godoy. — Hay un malentendido de parte del señor diputado. Son dos facultades. La junta podrá ejercitar la facultad de comprar el vino sin necesidad de prenda agraria, o podrá recurrir a la prenda agraria: en este caso,

no es compra sino un préstamo. Lo que se ha querido es dar a la junta los dos medios, los dos caminos, para que ella según las circunstancias decida cuál es el mejor, de acuerdo a las conveniencias generales.

Sr. Repetto (N.). — Entonces, señor diputado, yo he interpretado bien el artículo. Sostuve que en estos casos la junta compra directamente el vino y entrega de inmediato el importe. He sostenido la conveniencia de que la prenda agraria sea la regla universal y única en esta clase de operaciones.

Sr. Godoy. — El despacho establece...

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Sírvanse no dialogar los señores diputados, para no prolongar innecesariamente el debate.

Se va a votar el despacho de la comisión.

Sr. Pena. — Se está aclarando. Me parece que el señor presidente no puede resolver que no se aclare.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Los señores diputados están dialogando sin solicitar la palabra.

Sr. Pena. — Puede el señor presidente reclamar que se solicite la palabra.

Sr. Godoy. — No se puede aceptar la proposición que se propone, porque es cambiar substancialmente la cuestión.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Es lo que ha dicho el miembro de la comisión.

No habiendo ningún orador anotado, se va a votar la segunda parte del inciso c).

—Resulta afirmativa.

—Sin observación, se votan y aprueban los incisos d) y e).

Sr. Godoy. — Correspondería agregar ahora como inciso f) el que he propuesto.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se dará lectura del inciso f), nuevo, propuesto por la comisión.

—Se lee:

Inciso f): Para promover la agrupación de los productores de uvas sin bodega en entidades cooperativas, de acuerdo a la ley número 11.388 para la industrialización y comercialización de sus cosechas.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el inciso f).

—Resulta aprobado.

—Sin observación, se vota y aprueban los artículos 3º y 4º.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Para proponer un agregado al artículo 4º, que diría lo siguiente: «A la sobretasa fijada en este artículo le son aplicables todas las disposiciones legales que rigen para el impuesto interno nacional unificado al vino y será percibido conjuntamente con él.»

Considero que es una disposición indispensable para poder ser aplicados todos los requisitos legales referentes al impuesto interno a los vinos.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — ¿El señor diputado lo propone en nombre de la comisión?

Sr. Godoy. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — En consideración el agregado al artículo 4º de que se dará lectura.

—Se lee:

A la sobretasa fijada en este artículo le son aplicables todas las disposiciones legales que rigen para el impuesto interno nacional unificado al vino y será percibido conjuntamente con él.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se votará.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — En consideración el artículo 5º.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Me parece que en este artículo hay un error de redacción; donde dice «Poder Ejecutivo nacional», debe decir «gobierno nacional».

Se trata de correlacionar este artículo con el 26 de la ley de unificación de impuestos que votó ayer la Cámara. Es decir, que las presuntas facultades que puedan tener las provincias para regular su producción las traspasan, en virtud de esta ley y durante su vigencia, al gobierno de la Nación, pero no a uno de sus poderes. Cada uno de los poderes las ejercerán de acuerdo a lo establecido por la Constitución y las leyes orgánicas del país.

Entiendo, pues, que debe decir «el gobierno nacional» y no «el Poder Ejecutivo», y hago indicación para que se altere la redacción del despacho en ese sentido.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

En realidad, la modificación propuesta está de acuerdo con el concepto fundamental que ha informado la confección del proyecto de ley.

Sr. Dickmann (A.). — Por eso dije que debe ser un error de redacción.

Sr. Godoy. — Pero hay un distingo que hacer. La redacción que trae el despacho permitiría que el Poder Ejecutivo nacional, con la autorización que el Congreso le da, ejercitara esta facultad en casos de urgencia sin necesidad de recurrir nuevamente al Congreso para pedir su venia. Es decir, que la redacción del despacho contempla ya la necesidad de que se interprete este artículo como la autorización dada por el Congreso al Poder Ejecutivo.

Por eso mantengo el despacho.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Después de las explicaciones dadas por el miembro informante de la comisión, el asunto se hace mucho más serio y grave. Creía facilitar la rápida solución limitándome a hacer una breve indicación, suficiente para que se comprenda que el Congreso de ninguna manera puede, además de las amplias

facultades que ya le otorga por esta ley y por la ley de unificación de impuestos, al Poder Ejecutivo a tomar todas aquellas medidas que considere convenientes, aún excediéndose de sus atribuciones constitucionales.

¿Es posible que se entregue al Poder Ejecutivo más facultades de lo que ya esta ley le otorga? El podrá moverse dentro de lo previsto por esta ley. Y de ningún modo puede el Congreso argentino, porque le está vedado con calificativos muy duros por la Constitución nacional, otorgar a otro poder facultades extraordinarias. Y eso es lo que implicaría el artículo redactado en la forma como lo despacha la comisión.

Aunque el Congreso lo sancione, no hay posibilidad de que tenga validez de ninguna naturaleza, porque importa entregar al Poder Ejecutivo la «suma del poder», cosa que la Constitución nacional no tolera.

Esta ley tendrá que interpretarse en el sentido de que a la junta le son entregadas las facultades que ella taxativamente expresa, pero de ninguna manera también aquellas que presuntivamente se les supone a las provincias para que los renuncie a favor del Poder Ejecutivo nacional, ni las que el gobierno de la Nación tiene por la Constitución, a favor de ese solo poder.

Si después de esta explicación, muy breve, pero que me parece suficientemente clara y precisa, mantuviera la comisión su despacho, tendríamos que pedir una votación nominal para descargar la responsabilidad de la sanción de una ley en estas condiciones.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

Yo también debo hacer una observación a este artículo, y coincido en mucho con la que acaba de hacer el señor diputado Dickmann. Creo que este artículo debe suprimirse, si las provincias tienen derecho a regular su producción, una ley del Congreso de la Nación no se lo puede arrebatar y entregarlo de motu proprio, por su deliberación exclusiva, el Poder Ejecutivo de la Nación. Se explicaba una dispo-

sición de esta índole en la ley de unificación de impuestos internos, porque esa es una ley convenio entre la Nación y las provincias. Si éstas asienten a entregar ese derecho de regular la producción al Congreso de la Nación, bien haya con ello. Pero esta ley que discutimos, tienen un carácter totalmente distinto; es una ley netamente nacional, en la que las provincias no son parte.

Hago esta observación para salvar mis escrúpulos constitucionales una vez más; considero que este artículo está totalmente fuera de lugar. De no prosperar su eliminación, voy a votar la proposición del señor diputado Dickmann, que dentro de todo considero que es lo mejor que se puede hacer en ese caso.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

En realidad, se está magnificando la cuestión que encierra este artículo.

Es evidente que si esta ley ha de tener una finalidad práctica, es menester suministrarle al Poder Ejecutivo los elementos necesarios para poder desenvolverse. Ahora bien, esta disposición está correlacionada con la facultad que se acuerda por el inciso d) del artículo 2º, y será menester, para poder utilizar la autorización que el artículo 5º confiere al Poder Ejecutivo de la Nación, que se hayan celebrado los convenios respectivos con las provincias, contemplando así debidamente su autonomía y su soberanía.

De manera que no hay, en realidad, ningún peligro, ni ningún avance. Han sido contemplados los diferentes aspectos de la cuestión, y tal como está redactado el artículo es la única forma viable para que pueda tener eficacia en la práctica. Será el Poder Ejecutivo de la Nación el que podrá utilizar esta facultad, y una vez que haya celebrado los convenios con los gobiernos de provincia podrá obrar dentro del territorio provincial.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — ¿En consecuencia, la comisión no acepta?

Sr. Godoy. — No puede aceptar, por ese motivo.

Sr. Arce. — Pido la palabra.

En el artículo 5º, que se va a votar, se hace referencia al artículo 26, párrafo 3º, de la ley de unificación de impuestos internos, ley que no existe todavía, y en consecuencia no se puede saber con seguridad si el artículo a que se refiere el concepto del artículo 5º es el 26, párrafo 3º.

Si hubiera de mantener la comisión este artículo, yo propondría que se dijera: «...provincias productoras de vino de regular la producción a que se refiere la ley de unificación de impuestos internos», etcétera. No vaya a resultar que por alguna modificación en el Senado, el artículo 26, párrafo 3º, resulte artículo 24, 28 ó párrafo 2º, y estemos entonces dictando leyes con una redacción inconveniente y al propio tiempo con una incoordinación más inconveniente todavía.

De todas maneras, el propósito de la comisión estaría mantenido con la supresión de las palabras a que he hecho referencia.

Sr. Godoy. — No hay inconveniente en aceptar esa modificación.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a leer el artículo tal como ha sido propuesto por la comisión, con la modificación aceptada.

—Se lee:

Artículo 5º — Durante la vigencia de la sobretasa, la facultad que asista a las provincias productoras de vino de regular la producción a que se refiere la ley de unificación de impuestos internos, sólo podrá ser ejercida a los efectos de esta ley por el Poder Ejecutivo nacional, el que podrá tomar las medidas necesarias para hacer obligatorias las disposiciones que se dicten en tal sentido.

Sr. Ahumada. — Dejo constancia que ha quedado aclarado por parte de la comisión que este artículo sólo podrá hacerse efectivo una vez que se celebren con las provincias respectivas los convenios necesarios.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Así es, señor diputado.

Sr. Noble (J. A.). — Pido la palabra. Consideramos los diputados demó-

cratas progresistas, que por este artículo se le darían al Poder Ejecutivo facultades que incumben al gobierno nacional en su integridad.

Si algo corresponde en estos momentos es que el Congreso reaccione oponiendo al Poder Ejecutivo trabas a sus propósitos de absorción de facultades y no que se abran las puertas para que siga practicando impunemente su política económica y financiera a espaldas de las Cámaras.

Sr. Dickmann (A.). — Por mi parte desisto de la votación nominal porque ha quedado evidentemente establecido cuáles son los sectores que van a votar en contra. No he tenido el propósito de perturbar el trabajo de la Cámara.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

Este artículo se ha puesto en la ley por razones de orden práctico. Los 30.000.000 de pesos alcanzarán para comprar por dos o tres años la uva que no deba ser dedicada a la vinificación.

Si a pesar de la eliminación de viñedos se presentase una cosecha superabundante, podría llegarse a una superproducción de vino y en ese caso habría que recurrir a separar de la vinificación el sobrante de uva mediante un impuesto en especie. Tal propósito solamente se podrá llevar a cabo sin inconvenientes si la facultad de imposición queda en manos de esta junta. Si la junta cree que debe eliminarse el 10 % de la uva y las provincias creen que se debe eliminar el 5, la regulación no podría ser hecha.

De modo, pues, que el aditamento de este artículo no obedece a un propósito del gobierno de actuar a espaldas del Congreso, ni de disponer de facultades extraordinarias. El señor diputado por Santa Fe, que se muestra tan celoso de las prerrogativas del Congreso, puede contar con que el ministro de Agricultura también las respeta. Oportunamente explicamos las razones que nos asistieron para tomar, sin el concurso del Congreso, las medidas a que se refirió el señor diputado Noble, no obstante haber deseado últimamente adoptarlas con su colaboración. No lo

hemos podido hacer de otra manera; pero desde ya puedo anunciar al señor diputado por Santa Fe que las leyes que regularicen esta situación han de venir al Congreso antes de que terminen las sesiones.

Sr. Noble (J. A.). — El señor ministro reconoce la verdad de mis afirmaciones y al mismo tiempo declara que, con atraso de un año, las leyes van a venir al Congreso.

Sr. Ministro de Agricultura. — Porque no lo hemos podido hacer antes. Ya lo explicamos con amplitud en su oportunidad.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el artículo 5º del despacho de la comisión, en la forma leída.

— Resulta afirmativa.

Sr. Dickmann (A.). — ¿De cuántos votos?

Sr. Prosecretario (Madero). — De 57 votos. Votan 97 señores diputados.

Sr. Dickmann (A.). — Se podría rectificar, poniéndonos de pie los que votamos en contra.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a rectificar la votación, en la forma indicada.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Que da rechazado.

Sr. Dickmann (A.). — Que se vote en la forma que yo he propuesto: que se substituyan las palabras «Poder Ejecutivo» por las de «gobierno nacional».

La supresión tiene algún inconveniente. Este artículo es una cortapisa a algunas facultades que presumen tener las provincias que descoordinarían lo que se quiere coordinar.

Sr. Ahumada. — ¿Qué es lo que se ha votado?

Sr. Noble (J. A.). — Se ha rechazado el artículo tal cual ha sido propuesto, y hay otro artículo propuesto por el señor diputado Dickmann.

Sr. Ministro de Agricultura. — Yo preguntaría al señor diputado: ¿si el Congreso está en receso y hay que tomar la medida?

Sr. Dickmann (A.). — Parece que no nos hemos entendido, señor ministro.

Esta ley da a la junta facultades realmente extraordinarias y dentro de ellas puede tomar las medidas que estime convenientes, pero el artículo se refiere a presuntas facultades que puedan tener las provincias y las que tiene el gobierno de la Nación en virtud de leyes orgánicas o de la misma Constitución, que no pueden ser renunciadas.

Dentro del tecnicismo de la ley la junta puede moverse con una libertad que, a nuestro juicio, es excesiva, no le demos, pues más.

Sr. Ministro de Agricultura. — Perjudicarán su acción. Quiero que quede constancia de ello.

Sr. Ghioldi. — ¿No confía el señor ministro en la asistencia de la mayoría parlamentaria a sesiones extraordinarias?

Sr. Ministro de Agricultura. — Pero mientras se convoca al Congreso...

Sr. Ghioldi. — Eso se puede hacer en 48 horas.

Sr. Ministro de Agricultura. — Es muy difícil.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Ruego a los señores diputados que no dialoguen.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Ahumada. — Hay que aclarar el alcance de la votación anterior. He entendido que se votaba por la subsistencia o la eliminación definitiva del artículo.

Sr. Dickmann (E.). — No, señor.

Sr. Ahumada. — En ese caso hay que rectificar la votación, efectuándola por partes.

Sr. Dickmann (A.). — Que se vote el artículo con exclusión de las palabras «Poder Ejecutivo nacional»; y luego las palabras «Poder Ejecutivo nacional»; si éstas fueran rechazadas, las que yo propongo.

Sr. Ahumada. — Acepto que se vote en esa forma.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Primeramente debe resolverse la reconsideración del artículo. Se requieren dos tercios de votos.

Se va a votar si se reconsidera el artículo 5°.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el artículo 5°, con la reserva de las palabras «el Poder Ejecutivo nacional».

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se van a votar las palabras «el Poder Ejecutivo nacional».

—Se vota, y resulta negativa de 43 votos sobre 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Habiendo sido rechazadas las palabras «el Poder Ejecutivo nacional», se van a votar las palabras «el gobierno nacional».

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Arce. — Habiéndose aprobado con las palabras «el gobierno nacional», no tienen sentido las últimas palabras del artículo. El artículo debe terminar en las palabras «el gobierno nacional». El Congreso dictará las medidas necesarias y el Poder Ejecutivo las hará cumplir. De tal manera, que para ser lógicos, el artículo debe terminar en las palabras «el gobierno nacional», suprimiéndose el resto. En una palabra, resulta que lo que antes era de las provincias es ahora de la Nación.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Para eso sería necesario reconsiderar el artículo.

Sr. Arce. — Hago indicación de que se reconsidere.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar si se reconsidera el artículo 5°, a efecto de hacerle la corrección indicada por el señor diputado Arce.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar la supresión, en el artículo

5°, de las palabras que están después de «gobierno nacional».

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — De manera que en el artículo 5° quedan suprimidas las palabras «el que podrá tomar las medidas necesarias para haber obligatorias las disposiciones que se dicten en tal sentido».

Está en discusión el artículo 6°.

Sr. Repetto (N.). — Pido la palabra.

Por el inciso a) del artículo 2°, la Cámara ha adoptado la política de promover la eliminación, mediante la concesión de algunas indemnizaciones, de las tierras menos aptas para el cultivo de la viña. En este artículo 6° la Cámara renuncia a ese principio adoptado y acepta otro que es totalmente inverso. Este artículo castiga con un verdadero golpe de maza a uno de los territorios más aptos para el cultivo de la viña, y no sólo lo castiga con un mortal golpe de maza, sino que ni siquiera le concede la más mínima indemnización. Yo no comprendo cómo un plan de regulación de la producción puede incurrir en un error de esta gravedad. No veo cómo se puede regular la industria del país condenando a muerte — salvo que este artículo fuera declarado inconstitucional, opinión que el señor diputado Moret me ha expresado — a la industria vitivinícola del territorio de Río Negro, mediante la aplicación de esta medida. Si este artículo se aplicara tal cual está redactado, eliminaríamos de golpe aquello que en el país se presenta como lo más adecuado para estímulo y fomento de esta industria, y dejaríamos, en cambio, infinidad de territorios y de zonas que, según es de conocimiento general, no reúnen las condiciones necesarias para hacer viable esta industria.

El señor diputado Palacín se ha referido a numerosas ventajas que ofrece la industria vitivinícola de Río Negro sobre la de otras provincias. Yo quiero señalar, ahora, algunas otras que me parecen no sólo importantes,

sino decisivas. En Río Negro están, también, comprometidos muchos esfuerzos y muchos intereses, y creo que también algunos bancos oficiales tienen allí préstamos distribuidos por valor de algunos millones que corren en este momento, tanto riesgo como en las provincias andinas.

Río Negro no sólo se presenta a nuestra consideración especial por la distribución de la población, por el reparto de la tierra, por la existencia del viñador pequeño propietario, por una organización de la industria mejor orientada y basada de preferencia sobre asociaciones cooperativas. Río Negro ofrece, sobre estas ventajas, una que es principalísima y que me atrevo a proclamar con todo desinterés porque nada me ata ni me liga a aquel territorio.

Tengo conocimiento de un trabajo muy serio que ha realizado en Río Negro uno de los descendientes de aquella vieja firma de vinos de la provincia de San Juan que por muchos años — y creo que todavía — ofreció al país ese vino generoso que se distribuye en botellas de a litro, con una etiqueta en la cual se ostentan tres o cuatro medallas de oro que representan los premios obtenidos por esa industria. Hago esta explicación para no dar el nombre de la firma, a la que no quiero hacer ahora ninguna reclame. Pero un descendiente de esa vieja firma argentina ha hecho en Río Negro un estudio que se ha prolongado por espacio de diez años sobre una superficie de diez hectáreas, estudio que comprende las condiciones y variaciones meteorológicas, la composición química de la tierra, la distribución y la calidad de las aguas, los métodos y los costos del transporte hasta los mercados de consumo, y el sistema fiscal, que gravita indiscutiblemente, que interviene como factor importante en las resultancias económicas de una empresa de esta naturaleza. De ese estudio ha resultado lo siguiente: que Río Negro es la región del país que más se parece por este conjunto de condiciones a las que pue-

den caracterizar a una buena región vitivinícola, la que más se parece a las viejas y renombradas regiones vitivinícolas de Francia e Italia. Son circunstancias que se refieren a la latitud, temperatura — excesiva en algunas provincias andinas con respecto a la normal de las mejores regiones vitivinícolas del mundo —, al régimen de las lluvias, de las heladas, a la composición de la tierra y aun al régimen del riego, ya bastante defectuoso en Río Negro por razones de técnica que todos conocemos.

Río Negro es también una región dedicada con cierta extensión a la fruticultura, pero su fruticultura no podría compensar el formidable mazazo que recibirá con este artículo, porque esa industria es de iniciación reciente, joven, de plantaciones que aun no están en período de productividad y que necesitan tres o cuatro años más para desenvolverse y resolver su problema económico.

¿Qué resultará con la sanción de este artículo? Vamos a destruir completamente una zona que nosotros, el gobierno de la Nación, los bancos oficiales y buena parte del comercio de la Capital han fomentado con leyes y con préstamos.

Sr. Buira. — Señor presidente: Es imposible continuar en esta forma, porque los señores diputados hablan y no prestan atención al orador.

Sr. Repetto (N.). — Yo ya me he hecho a la idea de que este recinto es una plaza y hablo aquí en el tono en que se debe hablar en las plazas, teniendo para los que me perturban la misma desconsideración que ellos tienen para el orador.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Advierto que son diputados de todos los sectores los que hablan, y espero que sabrán guardar el silencio necesario para que pueda proseguir el orador su exposición.

Sr. Repetto (N.). — Pero hay algunos sectores que se especializan.

Me pregunto si tenemos el derecho de sacrificar una industria con una dis-

posición tan mal inspirada e inadmisible porque sería inconcebible que una ley dictada para regularizar el funcionamiento de una industria llegara a matarla, tratándose de regiones que se presentan como las más aptas y de mayor porvenir. Sería como si nosotros, para defender el interés de los peores ganaderos o agricultores, dictáramos una ley que tendiera a imposibilitar el desarrollo, el funcionamiento económico de las regiones mejor dotadas en el país para esas industrias y pretendiéramos someter el país todo a las normas y reglas características de los peores productores. No quiero creer que este golpe de maza se dé por tratarse de un adversario pequeño, porque se trate de un grupo de hombres que no tienen todavía la importancia política que pueden ostentar y ostentan con eficacia los hombres de Cuyo.

—Ocupa su asiento en el recinto, el señor ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

No creo que vaya a consumarse este atentado porque se trate de la expresión más modesta aunque más moderna de la industria vitivinícola del país. No quiero creerlo.

Veo en esta política, auspiciada por el propio Poder Ejecutivo, una contradicción porque ha fomentado el trabajo, de esa zona por todos los medios posibles y en forma efficacísima, dejando de percibir el canon de riego, perdonando casi en forma explícita la obligación de amortizar las obras; en una palabra, poniendo aquellas comarcas en las mejores condiciones para que la gente se lance estimulada por estas medidas a la empresa. Ahora que la empresa se inicia, que el esfuerzo está comprometido, que la perspectiva sonríe ante la proximidad de los primeros frutos, sale la Cámara con esta brutal ley reguladora, tan audaz que no se atreverían a dictarla los bolcheviques, que no han concebido nunca nada semejante. Sale ahora el Congreso con esta ley reguladora y so pretexto

de ordenar la producción del país, da a aquella región un golpe de maza, que implicará su muerte definitiva. No sé si se tiene el derecho de consumir este atentado con una región que desarrollaba su industria manteniéndola casi exclusivamente dentro de la zona natural de su influencia y gozando simplemente de las ventajas fiscales que representaban para ella la ausencia de impuestos, y también de las condiciones especiales en que se encontraba favorecida para el transporte de sus productos, que le permitía y le permite aplicar en vasta medida el transporte por agua.

En defensa de aquellos intereses tan respetables y tan legítimos protesto por la incorporación de este principio que está en pugna con la misma ley, porque regular la producción no quiere decir sacrificar los mejores terrenos y las mejores aptitudes.

El señor diputado Vicchi recordaba ayer manifestaciones hechas por mí en Mendoza con motivo de un reportaje del diario «Los Andes». Reconozco haber dicho esas palabras, pero entendía y hoy sigo entendiendo, que la política de la provincia de Mendoza debe consistir en eliminar el cultivo de la vid, de todas aquellas regiones que se saben posiblemente inferiores para esa clase de cultivos; y para obtener ese resultado es indispensable indemnizar a los propietarios, a quienes se invita gentilmente a abandonar esa aplicación para sus tierras. Esa me parece una política inteligente, porque tiende a eliminar las peores tierras, las menos aptas, dejando el campo libre a las mejores. Pero es lo inverso lo que se hace dentro de esta ley y en un doble sentido. Se sacrifican, no me atrevería a decir las mejores, pero en todo caso tierras que están en igualdad de condiciones a las de las provincias andinas y, por otra parte, no se atiende al principio equitativo de la indemnización, como sería el caso.

Esto quería decir en defensa de estos productores y como protesta con-

tra el principio inconcebible contenido en este proyecto.

Sr. Bustillo. — Pido la palabra.

Quiero justificar mi firma en este despacho. Cuando formé parte de la subcomisión que estudió el proyecto del Poder Ejecutivo, confieso que una de las grandes preocupaciones que tenía era la relativa a la situación de Río Negro, que conozco, sobre todo por su influencia en el Sur de la provincia de Buenos Aires. Declararé en la subcomisión que me animaba el propósito de estudiar el asunto con un criterio nacional, de modo que no tuviesen predominancia los intereses regionales.

La situación que se ha creado a Río Negro no proviene en realidad de esta ley, sino de la unificación de los impuestos. La industria vitivinícola de Río Negro se ha desarrollado a expensas de la situación privilegiada que significaba el hecho de que en otras provincias estuviese gravado con impuestos el vino. Al sancionar el impuesto nacional, desaparece lógicamente esa situación de privilegio. Por eso he considerado que debía encararse el asunto con un criterio de interés nacional, considerándose la situación de la industria del vino desde el punto de vista técnico y económico. Me parece que la ley lo contempla, porque si bien es cierto que el territorio de Río Negro no podrá concurrir con su vino a los grandes mercados de consumo, es evidente que en la zona de influencia de ese territorio, que es el Sur de la provincia de Buenos Aires y los mismos territorios, no tendrá la competencia del vino de las provincias de Cuyo, por la simple razón de que el costo de producción de este vino estaría gravado por los mayores fletes ferroviarios.

A mi proposición, se estableció en este artículo el período de tiempo. Al principio era de cinco años, y yo propuse que fuera de tres años prorrogables, dándose entonces a la ley el carácter de emergencia. Durante ese tiempo se puede estudiar el asunto en su aspecto

constitucional, contemplando los intereses y la situación actual de cada una de las provincias productoras de vino.

Creo que el artículo, se ponga o no un impuesto, es en realidad inocuo, porque, dada la situación de la industria vitivinícola en toda la República, es materialmente imposible que nadie pudiera extender sus cultivos. Entonces, me ha parecido, aun teniendo en cuenta intereses de esa región, que lo que se hace en esta ley es dar al asunto un carácter técnico y económico, contemplándolo desde el punto de vista nacional. Con ese propósito y ese espíritu he firmado el despacho.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Corresponde el uso de la palabra al señor diputado Godoy.

Sr. Ahumada. — Le pido al señor diputado me permita hablar ahora, porque tendrá que contestar las observaciones que yo haga.

Sr. Godoy. — Cedo la palabra al señor diputado.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Advierto que también está anotado el señor diputado Bunge.

Sr. Bunge. — No tengo inconveniente en que haga uso de la palabra el señor diputado Ahumada, porque seguramente la observación que va a hacer coincidirá con la que yo pensaba formular, y como es abogado podrá hacerla mejor.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Tiene la palabra el señor diputado Ahumada.

Sr. Ahumada. — Desde luego, declaro que hablo en nombre del bloque que votará como un solo hombre en contra de este artículo.

Hay aquí un verdadero juego de palabras. Lo que debe decir este artículo es, lisa y llanamente: Queda prohibido de hoy en adelante en todo el territorio de la Nación plantar viña. No se dice eso expresamente, y se utiliza la cortina de humo del impuesto de 1.000 pesos, que prácticamente conducirá a ese resultado, pues a nadie se le ocurrirá plantar viña para soportar semejante impuesto. Se trata, entonces, de una medida netamente prohibitiva.

¿Qué justificación tiene? Ya me an-

ticipó mi distinguido colega el señor diputado Godoy, la argumentación contundente: sería absurdo que por un lado la ley autorizara la extirpación de viñas, acordando la indemnización correspondiente, y por otro se permitiera seguir plantando viñas en el país.

Pero, son dos situaciones totalmente distintas, cuyo nexo de unión no veo claramente. Para extirpar viña, para recurrir a esa medida poco grata, se puede invocar la necesidad superior de la Nación, la voluntad, y la concurrencia del consentimiento del interesado para llegar a ese procedimiento de la extirpación de la viña. En este otro caso de la prohibición que se quiere imponer, no media ese consentimiento; quiera o no el propietario, la ley le va a imponer que no puede plantar viñas.

Declaro que a pesar de las nuevas corrientes del derecho soy un poco individualista, aun en la concepción de los derechos individuales; tengo un concepto quizá un poco anticuado sobre el derecho de propiedad y me parece, tal vez por esa razón, que esta medida es totalmente arbitraria y sin justificación moral ni legal de ninguna clase. Reconozco que en ciertas naciones se ha llegado a eso, por ejemplo en Francia, pero creo que no estamos en una situación tan angustiosa y terrible como para tener que sacrificar nuestros principios constitucionales elementales y los principios de derecho civil más substanciales para llegar a esa solución que se plantea, que importa el desconocimiento más violento del derecho de propiedad.

Eso en cuanto al derecho del individuo. Pero hay la cuestión constitucional que también me preocupó desde el primer momento. Esto en realidad es una contribución directa que se establecerá en todo el territorio del país. Y tanto es así, que la comisión preocupada de este aspecto de la cuestión, se ha curado en salud al establecer que este impuesto durará tres años, prorrogable hasta cinco, seguramente para evitar la observación de que las contribuciones directas sólo pueden establecerse en el país por un término limitado.

Pero se ha olvidado la otra exigencia constitucional que establece, que esas contribuciones sólo pueden imponerse con propósitos fiscales y en el caso de graves circunstancias, cuando lo necesite el erario del país. En este caso, no se invoca que la situación fiscal sea premiosa ni que el erario pase por malos momentos: se invoca, sencillamente, la conveniencia de una industria que se encuentra en situación más o menos molesta; para llegar a una medida de esta índole totalmente injustificada.

Podría extenderme en otras consideraciones sobre el asunto, pero muchos de los argumentos que iba a esgrimir los ha expuesto con eficacia el señor diputado Repetto. Por ello me he concretado solamente a las objeciones fundamentales que me merece este artículo, por cuya supresión vamos a votar lisa y llanamente.

Nada más.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Deseo agregar algunas consideraciones a las formuladas por el señor diputado Ahumada.

Entiendo que esta cláusula no puede encuadrarse en ninguna forma en el inciso segundo del artículo constitucional pertinente, desde que ese artículo faculta al Congreso para dictar contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación. Aquí, en cambio, se pretende gravar la tierra únicamente en el caso de que se dedique a determinado cultivo. Ese es un gravamen arbitrario, no es proporcional, igual en todo el territorio de la Nación; y es impracticable porque implica substituirse a las legislaturas provinciales en una facultad que les es privativa, aunque también tal vez fuera inconstitucional que una legislatura provincial pretendiera gravar determinado cultivo nuevo en esa forma.

Prácticamente, lo único que podría significar este artículo es una multa a los cultivadores de vid en los territorios nacionales, pues dudo que haya un juez que reconozca en una provin-

cia el alcance constitucional de este impuesto tan arbitrariamente fijado, sólo para determinada industria y para determinado comercio, industria que no puede ser considerada ilícita en sí misma, ni puede ser parada por la Nación en las provincias.

Si el propósito de la ley fuera establecer el monopolio del Estado de la industria del vino y, si el cultivo de la vid fuera también un monopolio del Estado, esas limitaciones tendrían sentido. Pero como no se trata de eso, como se trata solamente de garantizar un relativo monopolio para determinadas regiones del país, las considero repugnantes a nuestra Constitución y económicamente absurdas, porque situaciones creadas a favor de determinadas circunstancias no pueden prolongarse indefinidamente en beneficio de determinadas regiones y en perjuicio de otras zonas productoras del país.

Entiendo, pues, que como este artículo no es aplicable, porque no podrá gravarse con un impuesto especial, ninguna hectárea de viña de cultivos radicados en las provincias, su alcance real resulta monstruoso, al impedir solamente los nuevos cultivos de vid en determinadas regiones de la República.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Alrededor de este artículo se han hecho afirmaciones realmente estupendas, con grandes frases, con argumentos que parecería que tuvieran una gran fuerza de convicción, pero que en realidad tienen finalidades de índole única y exclusivamente política, porque consistencia legal y económica no poseen ninguna. Y lo voy a demostrar rápidamente.

Se ha dicho que esta disposición tiende a sacrificar a Río Negro y a matar su industria. ¿Pero es, acaso, una disposición que se proyecta para ser aplicada exclusivamente a Río Negro? ¿Es, acaso ésta, la región vitícola más importante del país? ¿Es, acaso, la única región del país donde pudiera existir el propósito de realizar nuevas plantaciones? ¿No se ha dicho por los

técnicos y por varios señores diputados que la región más apta para las plantaciones de vid es la de Cuyo? Entonces, serán Mendoza y San Juan las principalmente afectadas, y serán las que podrían protestar por una disposición de esta índole.

Voy a entrar al fondo del asunto. En el informe a que se ha hecho referencia tantas veces en este debate, en el informe del señor Liaudat, después de puntualizar cómo ha venido desarrollándose el crecimiento de las plantaciones de vid en los territorios de Río Negro y Neuquén, dando las cifras exactas desde el año 1925 hasta el año 1933, se expresa textualmente lo siguiente:

«Los viñedos de Río Negro y del Neuquén, en cambio, han adquirido importancia recién en los últimos años, a favor de las obras de riego, de las ventajas que les acuerda el actual régimen impositivo y del plan de emergencia puesto en práctica en Cuyo a principios de 1930 por las sociedades vitivinícolas. De 2.400 hectáreas en 1925, pasaron a 5.900 hectáreas en 1929 — en un quinquenio — y a 9.700 en 1933.

«Cabe destacar — agrega el informe — este segundo ascenso de 3.800 hectáreas, casi el 70 %, operado justamente en años críticos para las provincias de Cuyo y en momentos en que actuaban las sociedades aludidas».

De manera que el crecimiento de las plantaciones de vid en Río Negro y en Neuquén no ha sido determinado porque ofrezcan condiciones especialísimas para el cultivo de la vid; ha sido propulsado por aquellas medidas que tomaban los gobiernos e industriales de Cuyo y que, indirectamente, iban a favorecer las plantaciones de vid en otras regiones. Hoy en día, después de la unificación de los impuestos internos, quedarán todas las regiones vitícolas del país en igualdad de condiciones externas, y si alguna región podría ofrecer incentivo para realizar nuevas plantaciones, afirmo rotundamente que ella sería la de Cuyo, por-

que posee los privilegios que le acuerda la naturaleza y que se traducen en ventajas económicas para afrontar nuevas expansiones en sus plantíos de cepages.

No es, pues, este artículo en discusión, una medida enderezada contra Río Negro y contra Neuquén. Por el contrario, es una disposición que tiende a salvar a Río Negro, a Neuquén y a todas las otras regiones vitivinícolas más pobres del país. Tiende a salvarlas ¿por qué? Por una razón fundamental, señor presidente, porque se trata de que lo sano, lo vigoroso, lo que puede subsistir de la industria vitivinícola en esas regiones, no sea contaminado por las nuevas plantaciones que llevarán el gérmen de la muerte a la industria, porque serán plantaciones antieconómicas que determinarán la ruina de los nuevos plantadores y también de los antiguos cultivadores.

A eso tiende esta medida, que no es nueva, que no es una medida drástica y sólo concebible en regímenes soviéticos, como se ha dicho. Todas las naciones vitivinícolas del mundo las han adoptado ya, y voy a referirme brevemente a este aspecto del asunto.

Según los datos del «Boletín Internacional del Vino», la superficie cultivada de viña en el mundo ha crecido, después de la guerra europea, en 170.000 hectáreas, y paralelamente la producción mundial de vino ha aumentado de 35.000.000 de hectolitros, a 172.000.000 en 1932. ¡De 35 a 172.000.000, señor presidente! Esto ha producido la crisis vitivinícola mundial y ese mismo fenómeno es el que estamos observando y tratando de corregir en nuestro país.

¿Cómo han operado todos los países del mundo afectados por ese fenómeno? Primeramente me voy a referir a los organismos técnicos que han estudiado y se han expedido sobre este tema, a las conferencias internacionales del vino, a los congresos internacionales que se han reunido en París, en Roma y en Budapest, en los tres últimos años.

En dichas oportunidades, ¿cuál ha sido la sanción fundamental adoptada

por aquellos organismos técnicos, de los que formaban parte no sólo los representantes de la industria, sino los de los gobiernos, los de las facultades y los de todos los centros de estudios superiores que han podido ocuparse con verdadero conocimiento científico de este asunto? La resolución fundamental que han adoptado esos congresos es la siguiente, repetida en 1931, 1932, 1933 y ahora recientemente en 1934, también, en Budapest: «si se quiere detener la crisis vitícola mundial, hay que establecer la prohibición de nuevas plantaciones de viña como punto fundamental.» Así reza el texto de la declaración consagrada por esos congresos.

Pero vayamos un poco a la acción legislativa. Primeramente han afrontado este problema Hungría y España y en ambas la primera medida fué implantar la prohibición de nuevas plantaciones de viñedos. Le siguió la Unión Sudafricana, hace tres años, prohibiendo por el término de tres años, nuevas plantaciones de viña. En Portugal está sancionada la interdicción absoluta de nuevas plantaciones por la ley del 13 de Abril de 1932. En Rumania rige idéntica interdicción, que durará por el espacio de cinco años, establecida por la ley de 22 de Abril de 1932. En Grecia lo mismo, con esta diferencia: que en este país se ha adoptado el procedimiento que nosotros propiciamos en el despacho, estableciendo un impuesto a las nuevas plantaciones de viñedos, de 33.000 francos por hectárea. De manera que no es una novedad el expediente excogitado, ni tampoco hemos llegado a una cifra máxima en el gravamen, los autores del despacho.

Y llegamos a Francia. Nadie podrá negar que el derecho civil francés es el que ha inspirado nuestra codificación; que seguimos casi textualmente los preceptos del Código de Napoleón en materia de propiedad privada. Y si el Parlamento francés en años en que imperaban allí, como ya dije, mayorías ampliamente izquierdistas, ha dictado leyes casi con igual articulado que el que estamos tratando, ¿podremos

decir que el concepto de la propiedad privada tradicional, clásico, se encuentra atacado por disposiciones de esta naturaleza?

Voy a leer disposiciones de dos leyes francesas, una del año 1931 y otra de 1933. Debo advertir que en el año actual fué sancionada otra ley haciendo aún más rigurosas las disposiciones de las anteriores.

El artículo 3º de la ley de 1931, dice: «Sin embargo, durante un período de cinco años quedarán en suspenso todas las plantaciones o aquellos complementos de plantaciones que no resulten necesarios para asegurar, sea la conservación de los viñedos en su estado actual y en los emplazamientos que ahora tienen, sea el consumo personal de los cultivadores que reserven para su propio consumo la totalidad del vino o de las uvas obtenidos».

La ley de 1933, publicada en el «Boletín de Legislación y Documentos Parlamentarios Extranjeros», dice: «Durante un período de diez años, contados a partir de la promulgación de la presente ley, queda prohibido a toda persona o sociedad que posea o explote, ya directamente, ya en arrendamiento, aparcería, por cualquier otro procedimiento, tanto en Francia como en Argelia, en una o varias fincas, diez hectáreas de viña donde recolecte 500 hectolitros, plantar o hacer plantar de viñedos nuevos terrenos, excepto aquellas viñas cuyos productos se reserven para el consumo familiar».

La última modificación, la ley de 1934, no la conozco íntegramente, y sólo poseo las referencias contenidas en los periódicos.

De manera que estas disposiciones calificadas de draconianas, de soviéticas, tienen un antecedente no sólo en los otros países que cité, sino también en Francia, país reconocido como el más respetuoso de los conceptos tradicionales del derecho civil y donde imperan, como ya dije, partidos que se precian de cuidar los derechos individuales y sobre todo los de las clases populares.

Terminaré la rectificación haciendo una observación fundamental, a la que ya se refirió el señor diputado Ahumada. ¿Cómo es posible que pueda entrar en juego un plan regulador de la industria vitivinícola nacional, si por un lado autorizamos extirpación de viñedos por considerarlos antieconómicos, y por otro lado admitimos nuevas expansiones en las plantaciones de vid? ¿No habría en ello una contradicción evidente? ¿No incurriríamos en el absurdo; no estaríamos creando nuevamente la fuente de perturbaciones?

Esta prohibición se proyecta por un término de tres años prorrogable a cinco, que es el término prudencial en que calculamos que la industria vitivinícola nacional podrá recuperar su normalidad. Una vez que esté dentro de los cánones normales, dentro de los rieles de la estabilidad, evidentemente no habrá óbice para levantar la prohibición. Cuando la oferta y el consumo estén equilibrados, vengan en buena hora nuevos cultivos de vid, económicos, que den un rendimiento real y efectivo para los labradores y que sirvan para que la industria pueda seguir abasteciendo el incremento de consumo que la Nación irá adquiriendo por el aumento de población. Pero, por ahora, durante el término de prueba a que debe estar sometida la industria, sería sencillamente absurdo, determinar que los 30.000.000 de pesos se arrojaran a la calle, permitir nuevas plantaciones de viña, porque no podemos inyectarle el buen sentido al trabajador rural que no alcanza a comprender, en la mayor parte de los casos, que está cometiendo un gravísimo error contra sus propios intereses cuando dedica el pedazo de tierra que posee, a cultivos antieconómicos que no le darán el rendimiento a que aspira, que no le permitirán vivir del producto de su trabajo.

Esa es la situación actual para todas las plantaciones de vid de toda la República. El porvenir inmediato de los que se dedican a plantaciones de vid es por de más sombrío y ellos no sólo estarían haciendo, como dije, un mal negocio para sí mismos, sino que esta-

rían infiltrando el germen de mayor descomposición y ruina para el resto de la industria. ¡Cómo conseguiremos sanear el grueso de la industria si dejamos que pueda ésta ser objeto de la contaminación, por las nuevas plantaciones que resultarán, indudablemente, antieconómicas en el momento actual!

Hay que tener en cuenta también que las plantaciones, que tanto se quiere defender, de los territorios de Río Negro y de Neuquén, han sido estimuladas por el dinero de las arcas federales, por las obras de riego hechas por el gobierno nacional, y es lógico, entonces, que éste pueda usar de un remedio discreto y prudente para detener el mal en su límite actual y no permitir que rebase todo extremo y que provoque la ruina total de la industria nacional.

Quiero referirme, finalmente, a otro aspecto. ¿Por qué afirmaba, hace un instante, que la región más adecuada para el cultivo de la vid es la zona de Cuyo? Porque lo demuestran las estadísticas y los estudios técnicos. Es allí donde la vid tiene un mayor rendimiento por hectárea y mejor calidad el producto. En Mendoza, según el informe del técnico Liaudat, alcanza, el rinde, de 80 a 90 quintales; en San Juan, de 120 a 130, mientras que en Río Negro no llega a más de 70 u 80.

Debo advertir que estas cifras podrán ser discutidas y parecer un poco abultadas en algunos casos y bajas en otros. Pero lo que es indiscutible es que la región de Río Negro tiene una producción por hectárea mucho menor que la zona de Cuyo. No hablemos de otras regiones vitivinícolas del país que tienen rendimientos por hectárea realmente precarios y que lógicamente no deberían subsistir como cultivos económicos.

Repito que con esta medida prudente no sólo se busca hacer eficaz en la práctica un plan regulador, sino que se quiere alcanzar un objetivo social en beneficio directo de Río Negro, Neuquén y otras regiones vinícolas menos privilegiadas que la de Cuyo, pues se pretende impedir que esas regiones sean víctimas del fenómeno que ya ocu-

rrió en Cuyo y que nosotros conocemos bien por propia experiencia. Sucedió que los grandes rendimientos de la vid y del vino produjeron en la zona de Cuyo, en diversas oportunidades, la fiebre de la plantación de viñas y de ahí se originaron crisis sucesivas de superproducción en detrimento no sólo de los nuevos plantadores, sino también de los antiguos. Los nuevos plantadores, que habían tenido que usar del crédito para realizar su cultivo, fueron los primeros que cayeron, porque tenían menos poder de resistencia. Los antiguos plantadores, que ya tenían amortizado su capital, alcanzaron a resistir más.

En una crisis como la que infaliblemente sobrevendría en Río Negro a muy corto plazo, si prosiguiera sin límite el régimen de libertad de cultivo, los que estarían en peor aptitud para resistir la conmoción serían los nuevos plantadores que entrarían ahora a trabajar la tierra, si no se lo prohibiéramos, como lo establece el despacho.

Esta prohibición es sabia, prudente y leal y es la base fundamental del éxito de este plan regulador.

Nada más. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos*).

Sr. Arce. — Pido la palabra.

Pensaba votar en silencio en contra de este artículo; pero como el señor diputado por Mendoza interpreta que sólo motivos políticos — y al decir políticos ha querido aludir a motivos de política electoral — podrían justificar un voto semejante, me decido a fundar el mío.

Prescindiendo de que el remedio para impedir el inconveniente sobre el que ha disertado el señor diputado pueda ser, según lo resuelto por los técnicos y por los gobiernos europeos en los congresos de París, Roma y Budapest que ha recordado, limitar las zonas dedicadas al cultivo de la vid. Lo que es evidente es que el Congreso no puede gravar la tierra en provincias y por lo tanto no puede dictar esta ley para todo el territorio de la Nación. Pero aún si no hubiéramos de lanzarnos en esta tendencia resbaladiza por donde

vamos hacia el unitarismo económico absoluto, que, como dije al votar la ley de unificación de impuestos internos, no he de resistir más, porque parece ser iniciada por las propias provincias, creo que tampoco el Congreso podría crear impuestos diferenciales como sería el que grava la hectárea de tierra, en virtud de que se la dedica a un determinado cultivo. El artículo 17 de la Constitución ampararía al propietario y tengo la impresión de que ese impuesto sería declarado contrario a las prescripciones constitucionales. Podría replicarse que lo que se desea es precisamente que el Congreso haga uso de su facultad para gravar en los territorios federales, porque es allí donde puede presentarse el peligro. En ese orden de ideas ha abundado el señor diputado por Mendoza. Pero en ese caso, aun los que sostengan una doctrina o tesis contraria a aquélla por la cual me pronuncio, deben decir, lisa y llanamente y con toda claridad: queremos gravar precisamente en los territorios federales.

Sr. Vicchi. — No es ese el significado. Queremos gravar la plantación de la vid en todo el país, sin excepción.

Sr. Arce. — Pero no es posible que lo haga el Congreso en el territorio de las provincias.

Sr. Corominas Segura. — El Congreso haría uso de la facultad del inciso 2º del artículo 67, que le autoriza a imponer en las provincias contribuciones directas.

Sr. Arce. — Así es; pero por ese camino todas las facultades no delegadas por las provincias van a concluir por entrar a formar parte de las facultades del gobierno de la Nación. A eso es a lo que me estoy refiriendo cuando hablo del unitarismo económico. Con ese pequeño inciso podemos llegar a gravarlo todo y quitar a las provincias sus poderes impositivos.

En buena hora si así lo quieren los señores diputados, si son los hombres que representan al pueblo de la Nación en cada una de las provincias los que fomenten esa política; pero, por el momento, yo que voté la unificación de

impuestos internos, no me siento con la decisión necesaria para dar todavía al Congreso, en virtud de la interpretación del inciso a que se ha referido el señor diputado por Mendoza, esta facultad que entiendo no tiene.

En virtud de estas consideraciones y con prescindencia del fondo del asunto, he de votar en contra del artículo que, por otra parte, repito, si fuera sancionado sería declarado repugnante a la Constitución.

Sr. Palacín (M.). — Pido la palabra.

Voy a decir pocas para referirme a alguno de los argumentos que acaba de exponer el señor diputado por Mendoza, fundamentando el despacho de este proyecto de ley, según el cual se fijará un impuesto de 1.000 pesos para las nuevas plantaciones.

Invocar congresos internacionales y la legislación extranjera es siempre impresionante y puede ejercer influencia en el espíritu de los señores diputados. Si no hubiera sido por no aumentar los costos de mi exposición, hubiera contratado un vehículo para traer la abundante información sobre legislación internacional en materia de vinos que la biblioteca del Congreso tuvo la bondad de enviarme a casa; pero he resuelto suprimir los argumentos de índole internacional, porque en realidad siempre la información es deficiente, en primer lugar, porque existe la diferencia de la industria vitivinícola de nuestro país con respecto a todos los países que ha citado el señor diputado, con excepción de Argelia, quizá. Todos saben que en Francia la industria vitivinícola es una industria agrícola; que los campesinos franceses poseen media, una, dos, tres hectáreas de viña, haciendo en sus bodegas los caldos, realizándose el comercio por el acopio de esos caldos, y que los cortes se hacen en Burdeos, etcétera. Sin embargo, en Francia, como ha dicho con toda probidad mental el señor diputado, esa disposición solamente rige para quienes en una o más parcelas explotan más de 10 hectáreas de viñedo; quiere decir, que es una disposición que rige para

el aspecto industrial o capitalista de la producción. En España la prohibición de plantar nuevas viñas se refiere a tierras de regadío donde el gobierno juega una parte, y quiere prescindir de fomentar él la multiplicación de los viñedos. Entonces, para tierras de regadío rige esa disposición prohibitiva, pero no rige en general. En Portugal e Italia, el carácter de la vitivinicultura es también popular; no se trata de medidas tomadas en beneficio de grandes capitales sino de masas enormes de población, y las leyes italianas y portuguesas que sirven de inspiración para estas disposiciones, crean juntas asesoras sobre la base de organizaciones gremiales y cooperativas venerables por su arraigo, existentes allí, y no sobre la base de una reunión de señores industriales o viñadores, que seguramente serán vecinos expectables, es decir, los más prominentes, y que han de tener el gobierno de la industria. En Italia y Portugal esas juntas asesoras están constituidas en primer término, por funcionarios oficiales, catedráticos de enología o de todo lo que tiene que hacer con la ciencia del vino y, además, asesoradas por las cooperativas y federaciones de cooperativas regionales.

De manera que contesto al señor diputado Godoy, diciéndole: según el aspecto de una industria será mayor o menor el deber de la colectividad para sacrificarse en su beneficio.

No estamos seguros de que las condiciones de la industria cuyana sean exactamente las mismas que las de las industrias donde rigen las leyes a que se ha referido el señor diputado. Conocíamos esa legislación, pero no creíamos del caso el traerla a colación para resolver un problema eminentemente nacional.

Sr. Corominas Segura. — Pido la palabra.

Voy a pronunciar muy pocas palabras para hacerme cargo de los argumentos formulados en contra de este artículo, refiriéndome en primer término a las palabras del señor diputado

doctor Arce, que ataca la disposición proyectada, del punto de vista constitucional.

No hay al respecto ninguna dificultad; al dictar esta disposición estamos dentro de las facultades acordadas al Congreso por el inciso 2º del artículo 67 de la ley fundamental; basta, pues, leer el texto de la disposición para percibir la legitimidad con que el Congreso puede ejercer esa atribución. Se trataría, no de un impuesto sobre la tierra, sino de una contribución establecida sobre determinados cultivos que, por razón del bien general fijará el Congreso, por tiempo determinado.

Contemplamos la situación económica de zonas importantes de la República, preocupándonos de mejorar las condiciones de vida de gran cantidad de habitantes, que de otro modo se verían sometidos a situaciones verdaderamente calamitosas.

La Nación, en momentos en que entra a reglar lo necesario a una industria, hace perfectamente bien en adoptar disposiciones de esta naturaleza, que serán aplicadas, no sólo en los territorios nacionales, sino, incluso, en las zonas más aptas para la producción vitivinícola.

Parece innecesario destacar que si las estadísticas tienen alguna importancia es porque ellas precisan las cifras de la producción. La producción de Río Negro, que en este caso se invoca con una gran preocupación, da sólo 70 quintales métricos por hectárea, mientras que la de Mendoza se calcula, término medio, según análisis de lo cosechado durante veinte años, en 90 quintales o poco más por hectárea, y la de San Juan, en más de 100.

Si las estadísticas tienen alguna importancia y al legislar debe tenérselas en cuenta, es porque reflejan la realidad; no debe ni puede restarse importancia a los hechos reales de la vida económica del país. Si las provincias de Cuyo no fueran las más aptas para la producción vitivinícola, es indudable que esta industria se habría radicado en otra zona. Esta industria no

es reciente en el país. Tiene una larga tradición y los acontecimientos económicos, la observación y la experiencia habrían derivado la producción hacia otras regiones, de no ser aquélla la mejor.

Se ha criticado la brillante argumentación del señor diputado por Mendoza, doctor Godoy, en cuanto se fundaba en la legislación extranjera para propiciar esta que estamos discutiendo. Se trata del conocido argumento de autoridad de la legislación comparada, que algo significa: es la experiencia de otros pueblos que tienen más larga tradición legislativa que nosotros; que han podido hacer más extensos estudios y acreditar más larga preocupación por el desarrollo de sus industrias.

Después del análisis a que ha sido sometido el argumento de la legislación comparada, señalándose que la limitación en unos países se refiere a los productores que posean más de 10 hectáreas y que en otros la prohibición está supeditada a diversas circunstancias, cabe destacar lo que es fundamental y que no se ha podido negar: que numerosas naciones evolucionadas en su legislación, que cuidan especialmente el desarrollo de su producción y de su riqueza, han adoptado las mismas medidas que nos proponemos sancionar ahora para la industria vitivinícola argentina.

Estamos dentro de una corriente que no es nueva. Tenemos en nuestro favor la experiencia ajena y debemos aprovecharla. Sería absurdo que en el instante en que vamos a regular la producción, cometiéramos el desatino de indemnizar a los productores actuales de vid que supriman o transformen sus plantaciones y permitiéramos, en cambio, que, libremente, se siguieran haciendo nuevas plantaciones.

Se ha hablado mucho en este Congreso y fuera de él, en los grandes órganos de publicidad, de la necesidad de diversificar los cultivos y, justamente, es este el momento en que debe el Congreso demostrar su aptitud para orientar a los plantadores en ese senti-

do, estableciendo prescripciones claras, precisas y concretas que sirvan de advertencia y los guíe y conduzcan a un camino distinto en el terreno de la producción.

Sr. Repetto (N.). — Pido la palabra.

Necesito contestar algunas de las manifestaciones que ha hecho el señor miembro informante de la comisión.

A mi juicio, regular no quiere decir paralizar. Aquí no se trata de paralizar ninguna actividad útil; no se trata de someter la capacidad agrícola e industrial de los habitantes del país a una norma única y a la que más convenga a los peores productores.

Regularizar debe ser, señor diputado, huir de lo más antieconómico para aproximarse a lo más económico. El impuesto que se establece ahora sobre el vino, y el adicional, colocan a todas las regiones productoras de vino en igualdad de condiciones; pero ello no quiere decir que si hay una región vitivinícola donde existan circunstancias, aptitudes y elementos capaces de manifestarse en una forma superior a los de otras regiones, eso no quiere decir que deba impedirse tales manifestaciones. Siempre habrá, dentro de este régimen de uniformidad que crea la ley, regiones mejor dotadas, capacidades individuales, superiores, y entonces la ley no puede impedir, no obstante la regularización que persigue, que esas capacidades, esas aptitudes y esas superiores condiciones regionales se manifiesten.

¿Por qué no dejar que Río Negro, que estará ahora sometida al impuesto como el resto de la República, extienda el cultivo de la vid en la proporción en que lo necesita para salvar su propia existencia. ¿Por qué impedirsele? Este es el problema, señores diputados. Se trata de una región a la que hemos colocado en iguales condiciones que al resto de las regiones vitivinícolas del país y, no obstante eso, ahora pretendemos que Río Negro, pudiendo, necesitando extender sus cultivos de viña, no pueda hacerlo porque se lo impide una ley nacional.

El señor diputado Godoy nos señalaba hace un momento un ejemplo de un país que ha inspirado últimamente sus medidas de emergencia en un criterio jurídico respetable y fundado en una gran tradición. Nos hablaba de Francia, justamente en ese instante nosotros recordábamos el resultado absurdo de la política realizada en Francia en materia de trigo, que fué también una política reguladora, y una política que llevó a ese país a estos resultados tan extraordinarios: no pudiendo los agricultores franceses vender adentro el trigo al precio de 115 francos, a que estaban obligados por una ley del Parlamento, tuvieron que vender su trigo a mitad de precio en el exterior. Y así ocurrió que en Holanda, en Inglaterra, en Dinamarca y en algún otro país importador de trigo se comía el pan hecho con harina de trigo francés que costaba 45 francos el quintal y en Francia los franceses tenían que comer el pan hecho con harina de trigo nacional que costaba 115 francos el quintal.

Así es que en esta clase de política es preciso ser siempre un poco parcos y prudentes, sobre todo en un país como el nuestro que recién se inicia en este orden de regularización oficial de la industria y que lo hace abordando una formidable ley de impuestos internos que obliga exclusivamente a la Nación para entrar después en esta ley reguladora de los vinos, que importa nada menos que someter a todo el mundo a la imposición de no hacer uso, de no usufructuar cualquier ventaja local o de aptitud que pueda asistir al productor.

De manera que la cuestión me parece que es bien clara. Puestos todos los territorios del país en las mismas condiciones del punto de vista del impuesto, lo que corresponde es esto: si hay en alguna parte alguna aptitud superior o alguna condición superior a las demás, dejar la posibilidad de que esas aptitudes se desarrollen, porque dentro de un sistema de regulación no sería sensato ni lógico que impidiéramos

el progreso y que entendiéramos la regulación como el estancamiento definitivo, como el cartabón uniforme aplicado a todas las regiones del país.

Y no digo más porque me parece que he agotado todos los argumentos que podía emplear para sostener mi tesis.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Antenor R. Ferreira.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

Para no prolongar el debate voy a hacer una brevísima exposición.

En primer lugar, quiero destacar que se ha insistido hasta el cansancio en que esta ley reguladora tiene carácter nacional, de manera que las primas que se acuerden serán para substituir los cultivos que se transformen en Río Negro, en Mendoza, y en todas las demás zonas.

Después, no es admisible que se hable de que las zonas más aptas para el cultivo son los territorios, como aquí se ha dicho, y sobre esto sobran las razones y los argumentos dados ya por mis compañeros de representación Corominas Segura y Godoy.

Pero a los constitucionalistas — que es lo único que me interesa por el momento — quiero darles un precioso antecedente constitucional. Se trata de una sentencia de la Corte Federal de Estados Unidos, que tiene un sistema federal de gobierno como el nuestro y donde las autonomías de los Estados están más resguardadas que dentro de las disposiciones de nuestra Constitución nacional. En el caso *Leo Nebbia* versus Estado de Nueva York, en que se objetó de inconstitucional la ley de regulación de la industria lechera, uno de los párrafos del fallo expresa: «Una ordenanza del Estado estableciendo una oficina de control de la leche con poderes para fijar el mínimo y el máximo de los precios de venta de leche al consumidor y declarando ilegal el hecho de que cualquier distribuidor de leche (lechero) compre o venda leche a precios mayores o menores que

los fijados por la Oficina de Control, medidas que se tomen para evitar superproducción o competencia destructora y bajos precios que puedan poner en peligro o perjudicar esta industria que es la principal del Estado y que afecta a la salud del pueblo; y una orden de la Oficina de Control estableciendo el precio de 10 centavos por cuarto para la venta de leche por los distribuidores a los consumidores y 9 centavos por cuarto para la venta en las casas de negocio (almaceneros) a los consumidores, no es irrazonable o arbitrario o dispar con el propósito de la Legislatura y así no viola la cláusula regular de la enmienda 14 de la Constitución.»

Nada más.

Sr. Iribarne. — Pido la palabra.

Es evidente que el interés público debe triunfar siempre sobre el interés privado; pero para ello es necesario que se demuestre que el interés público existe.

En el presente caso se ha demostrado con argumentos convincentes, que se trata de sancionar un artículo que va en contra del interés general y por eso es que los intereses particulares lesionados harán valer su derecho y conseguirán, sin duda alguna, que se declare la inconstitucionalidad de la ley.

Sr. Vicchi. — ¿Si me permite una breve interrupción? Me ha dado una magnífica oportunidad para citar otro antecedente que no había dado. En Estados Unidos existe una ley de regulación de la producción de los algodones, dictada en el año 1933 y esa ley también es constitucional.

Sr. Iribarne. — Serán leyes que defiendan intereses generales de la Nación frente a intereses particulares; pero en el presente caso...

Sr. Corominas Segura. — En este momento Francia proyecta una ley análoga.

Sr. Iribarne. — ...en que se trata de defender los intereses de determinada zona en contra de los intereses de otra zona, los intereses particulares heridos harán valer sus derechos y los

harán triunfar ante la Corte Suprema de la Nación.

Los harán triunfar por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, el Congreso de la Nación puede aplicar contribuciones directas, pero siempre que sean proporcionalmente iguales en toda la Nación.

Sr. Corominas Segura. — Son contribuciones proporcionales, y son por tiempo determinado.

Sr. Iribarne. — No puede, pues, aplicar impuestos directos diferenciales.

En segundo lugar, hay una disposición expresa de la Constitución, en el artículo 17, que dice: «La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino». Y aplicar un impuesto de 1.000 pesos por hectárea es, evidentemente, aplicar un impuesto confiscatorio.

Hay, pues, dos razones fundamentales de carácter constitucional que harán valer los interesados lesionados y que los harán triunfar ante la Corte Suprema.

Ello no quiere decir que nosotros no propiciemos siempre el triunfo de los intereses generales sobre los intereses particulares.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el despacho.

—Mientras se llama para formar quórum:

Sr. Presidente (Ferreira). — Se invita a los señores diputados a ocupar sus bancas para que se pueda determinar el número de los que están en el recinto.

Sr. Ghioldi. — ¿No hay quórum en el recinto?

Sr. Presidente (Ferreira). — Se está verificando el número de diputados presentes.

Sr. Corominas Segura. — De todas maneras, el reglamento manda llamar para votar.

Sr. Pflieger. — Se debe llamar por un tiempo prudencial.

Sr. Amadeo y Videla. — Es curioso que los diputados socialistas, después

de haber dilatado el debate, muestren prisa ahora, cuando se trata de dos minutos.

Sr. Ruggieri. — Hay un sector de la Cámara...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Vicchi. — Hay quórum en la casa y debe procederse a la votación.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el despacho.

—Se vota y resulta afirmativa de 50 votos sobre un total de 93 señores diputados.

Sr. Ghioldi. — Solicito rectificación nominal.

—Suficientemente apoyada.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se tomará la votación nominal.

—Practicada la votación nominal:

Sr. Prosecretario (Madero). — Han votado 50 señores diputados por la afirmativa y 43 por la negativa.

—Votan por la afirmativa, los señores diputados: Alonso, Amadeo y Videla, Amoedo, de Andreis, Aráoz (Ernesto M.), Arrieta, Basualdo, Benegas, Bruchou, Buitrago, Bustillo, Candia, Cárcano, de las Carreras, Carús, Corominas Segura, Costa Méndez, Dávila, Escobar, Espil, Fernández, García Gorostiaga, Godoy, Gómez Rincón, González (V.), González Guerrico, Graffigna, Groppo, de Iriondo, Jardel, Martínez, Noble (J. A.), Noble (R. J.), Palacio, Pintos, Quiroga, Radío, Rodríguez, Salcedo, Santillán, Simón Padrós, Solari (F. C.), Solís, Speroni, Taboada Mora, Uriburu, de la Vega, Vicchi, Vionnet y Zarazaga.

—Votan por la negativa, los señores diputados: Agüero, Ahumada, Ameri, Arnoldi, Besasso, Bogliolo, Bonazzola, Briuolo, Buira, Bunge, Cáceres, Carreras, Castiñeiras, Coca, Della Latta, Dickmann (A.), Dickmann (E.), Ganza, Ghioldi, Giménez, Iribarne, Lamesa, Magris, Molina, Moret, Mouchet, Movsihoff, Oddone, Palacín (M.), Palacín

(P.), Parera, Pena, Pérez Leirós, Pflieger, Pressacco, Ramiconi, Ramírez, Repetto (N.), Rozas, Ruggieri, Solari (J. A.), Vidal Baigorri y Wade.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra para una aclaración.

Cuando inicié mi breve exposición, antes de votarse el artículo que acaba de sancionar la Cámara, dije un poco enfáticamente que hablaba en nombre del bloque radical y que ese bloque votaría en contra como un solo hombre. La experiencia parlamentaria — y en esta Cámara ya la tengo por espacio de tres años — me ha enseñado mucha prudencia. Se explica así que en las múltiples oportunidades en que he debido intervenir en los debates de la Cámara, sólo por muy rara excepción haya invocado la representación del bloque a que pertenezco. He hablado casi siempre en nombre personal porque me considero, sin jactancia, un diputado que puede hablar con la suficiente autoridad personal, sin necesidad de invocar la representación de ningún bloque parlamentario.

Cuando pensaba iniciar mi exposición, se acercaron varios colegas de mi grupo a manifestarme su opinión terminante y categórica en contra de este artículo que se consideraba un atropello contra las autonomías provinciales y los derechos individuales y me pidieron que hablara en nombre del bloque. Me llenó de satisfacción que nuestro bloque aunara así opiniones y que yo pudiera traer en este caso la opinión unánime de mis colegas de sector en un sentido determinado. La Cámara ha comprobado luego con estupefacción, que esta expresión del «solo hombre» ha resultado en definitiva aplicable sólo al caso de mis distinguidos colegas el diputado por La Rioja, profesor Cáceres, y el diputado por Santa Fe, señor Bonazzola.

No entro a explicar los motivos determinantes de este curioso fenómeno, pero he querido dejar terminantemente establecida mi situación personal, porque no quiero que la Cámara vea en ninguna de mis actitudes una posición equivoca. ¡Muy bien! ¡Muy bien!.

Sr. Ghioldi. — Pido la palabra.

Para dejar sentado lo siguiente: deben saber la Cámara y el país que la proyectada ley de unificación de impuestos internos no se entenderá cumplidamente si no se la interpreta a través de las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado.

Sr. Vicchi. — ¿Desde cuándo, en este recinto, se empiezan a calificar las votaciones después de estar terminadas?

Sr. Oddone. — Desde ahora.

Sr. Vicchi. — Ese es un procedimiento totalmente antiparlamentario. Los señores diputados saben perfectamente que una decisión de la Cámara no se discute. El país sabe bien — y la experiencia lo demostrará — que la Cámara ha dado hoy la sanción que reclamaban los intereses económicos más legítimos. El tiempo nos dirá quiénes están, en la razón y quiénes, por un fenómeno de incomprensión inexplicable, persisten en el error.

Sr. Ahumada. — Esta victoria de la derecha es una victoria a lo Pirro.

—Numerosos diputados hablan simultáneamente y suena la campana de orden.

Sr. Arce. — ¡Aquí no hay derecha ni izquierda; hay mayoría de la Cámara!

Sr. Presidente (Ferreira). — Continúa la discusión.

Sr. Bunge. — Pido que la Secretaría de lectura de un nuevo artículo que he propuesto.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El señor diputado Bunge propone como artículo nuevo el siguiente: «No podrá indemnizarse por esta ley al propietario de alguna nueva plantación de vid vinífera hecha en alguna provincia después de su entrada en vigor».

Sr. Bunge. — Toda ley debe ser pareja. Mantengo mi convicción de que el impuesto que acaba de sancionar la Cámara será declarado inconstitucional por los jueces cuando se quiera aplicar a cualquier cultivo nuevo de vid en cualquier provincia y que, por lo tan-

to, si no se quiere crear un privilegio regional deberá sancionarse el artículo que propongo.

Sr. Godoy. — Yo aceptaría el artículo que propone el señor diputado Bunge, pero con una ligera modificación de redacción, estableciendo que no podrán indemnizarse las nuevas plantaciones. Puede haber un propietario que tenga nuevas y viejas plantaciones...

Sr. Bunge. — He oído ayer que algunos propietarios de viejas plantaciones han ensayado la industria de las nuevas plantaciones. Por eso le ruego al señor diputado que no objete la redacción. Puede haber propietarios que hagan plantaciones y que terminen por hacerse indemnizar las viejas para renovarlas.

Sr. de la Vega. — La disposición debe ser general: para las provincias y para los territorios.

Sr. Rodríguez. — Desearía que la Secretaría me informara si el proyecto dice «provincias y territorios».

Sr. Presidente (Ferreira). — Solamente «provincias».

Se va a leer el artículo.

—Se lee:

No podrá indemnizarse las nuevas plantaciones viníferas después de sancionada esta ley.

Sr. Bunge. — No es eso. Yo he observado al señor miembro informante de la comisión que debe decirse: «a los propietarios de nuevas plantaciones», porque la industria podría hacerse indemnizar las viejas plantaciones de poco rendimiento reemplazándolas por nuevas.

Sr. Godoy. — La comisión acepta la forma propuesta por el señor diputado.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a leer.

—Se lee:

No podrá indemnizarse a los propietarios de nuevas plantaciones de vid vinífera, efectuadas después de sancionada esta ley.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En consideración el artículo 7º del despacho de la comisión, que pasa a ser 8º.

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Este artículo 7º del despacho de la comisión, no es una iniciativa que haya venido en el proyecto del Poder Ejecutivo. Es un agregado de la comisión sobre el cual el miembro informante ha omitido dar explicaciones. Yo quiero significar a este respecto, que se trata de dar, por una ley, vigor a un decreto de la dictadura, discutido por inconstitucional ante la justicia y, aunque fallado en primera instancia a favor de la legalidad del decreto, está en estos momentos en apelación ante la Cámara.

Deseo hacer oír a la Cámara, a este respecto, el juicio del ex ministro de Agricultura, doctor de Tomaso, quien en la sesión del 22 de Abril de 1932, daba, acerca de este decreto, esta opinión terminante: «He sostenido y sostengo que esta modificación que prohíbe vinificar uva fuera de producción, no se funda en ninguna ley existente, y contraría libertades constitucionales, y es por eso ilegal. Esa es mi opinión clara y terminante».

La Nación, por decreto ha prohibido el uso de la uva para vinificar fuera de las zonas o provincias de producción con la característica curiosa que la zona que produce la uva para vinificar la deja salir con pretextos numerosos y continúa, de esa manera, explicándose el misterio de que se elabore en muchas partes — habiendo prohibición para exportar uva para vinificar — una cantidad de vino con uva que les llega de las zonas productoras. Es un viejo problema sobre el cual la Cámara Sindical de Comercio ha venido realizando gestiones insistentes para que se derogara esa disposición inconsulta del Gobierno Provisional, y que ahora se desea incorporar a esta ley por un agregado de la comisión al proyecto originario del Poder Ejecutivo.

En una publicación, que tengo en mi poder, del Centro de Viñateros de Mendoza (Maipú), se dice que la razón que explica por qué algunos no desean consumir sino vino de uva, ante el fraude reiterado de la elaboración vínica de la gran industria de las bode-

gas más grandes del mundo, explica a su vez la diferencia de precio que justifica que el vino de uva se venda a doble precio que el de Mendoza. Quiero esto decir que el vino de Mendoza tiene elementos que no son rigurosamente de uva.

En la publicación que acabo de citar se agregan algunas consideraciones que me parecen de interés: «En los últimos años en que la venta de uva...

Sr. Godoy. — Si me permite, señor diputado...

La representación demócrata progresista iba a hacer una proposición, modificando el despacho de la comisión, de tal manera que conceptúo sería preferible que el señor diputado reservara para entonces la argumentación.

Sr. Pena. — Yo, señor presidente, ignoraba que se fuera a proponer ninguna clase de agregados ni modificaciones que pudieran mejorar este despacho ya que es difícil lograrlo de la mayoría en la Cámara, porque en general se resisten todas las buenas sugerencias. No podía pues, suponer que hubiera esa idea, de manera que tendría el deseo de conocer en qué consiste esa modificación de los señores diputados demócratas progresistas.

Sr. Noble (J. A.). — Con mucho gusto complaceré al señor diputado.

La disidencia que expresé no consta, por un error, en la orden del día impresa y consiste en un agregado al artículo 7º proyectado por la comisión y que dice así: «Las bodegas existentes en la actualidad situadas fuera de las zonas productoras de uva, cuya elaboración anual supere 20.000 hectolitros, podrán seguir elaborando vinos genuinos con uvas traídas de aquéllas, de acuerdo con lo que al respecto establece la reglamentación de la presente ley». De manera, que como segundo párrafo o complemento del artículo 7º, se incorporaría el 2º párrafo del artículo 5º del despacho de la ley general de vinos.

Creo que esto contempla el punto de vista que estaba exponiendo con gran claridad el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Es evidente que la proposición que formula el señor diputado por Santa Fe contempla en buena parte una situación de hecho, cual es la de permitir a organizaciones existentes la posibilidad de contar con la materia prima indispensable para continuar la elaboración de los vinos, como lo han venido haciendo hasta ahora con alguna ventaja, frente a las pocas ventajas que ofrece la seguridad que proponemos. De manera que habríamos salvado la dificultad momentáneamente.

Sr. Noble (J. A.). — Por mi parte declaro fundada la disidencia y la proposición que he formulado con las palabras del señor diputado Pena.

Sr. Godoy. — La comisión acepta el agregado que propone el señor diputado por Santa Fe, ingeniero Noble.

Sr. Dickmann (A.). — La situación que plantea el señor diputado por Santa Fe, sólo puede ser contemplada en parte, porque los elaboradores de vino menores de 20.000 hectolitros no entrarían en esta franquicia. Quiere decir que quedará subsistente una prohibición que evidentemente no beneficia a nadie. El pequeño elaborador que quiera hacer vino no podría hacerlo.

Sr. Godoy. — El elaborador de vino particular está completamente a cubierto de esta prohibición. La prohibición es elaborar para la venta, para el expendio y no para el que quiera elaborar para consumo propio.

Sr. Dickmann (A.). — Queda, entonces, entendido, que no está prohibida la elaboración para uso particular ni por consiguiente la exportación de uva con ese objeto, de las provincias. Si es así, no hay oposición.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el artículo 7º, que pasa a ser 8º, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se aprueba el artículo 8º, que pasa a ser 9º.

—El artículo 9º, ahora 10, es de forma.

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda sancionado.

Se comunicará al Honorable Senado.

6

ORDEN DE LA LABOR

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Como la Cámara está un tanto fatigada, voy a hacer una proposición, que espero ha de contar con el asentimiento de todos. Se trata de votar dos proyectos de relativa urgencia que no ofrecen mayor dificultad: el que figura en la orden del día 140, aprobando la conversión de cédulas del Banco Hipotecario Nacional, realizada hace ya más de un año, que tiene sanción del Honorable Senado, y el asunto número 3, de la orden del día 139, sobre modificación a la ley 11.683, de procedimiento para la percepción del impuesto a la renta. Hago indicación en ese sentido.

Sr. Presidente (Ferreira). — En consideración la indicación del señor diputado por Córdoba.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

7

CONVERSION DE LAS CEDULAS HIPOTECARIAS

Orden del día número 140

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, aprobando la conversión de cédulas del Banco Hipotecario Nacional, realizada en virtud de los decretos del Poder Ejecutivo de fechas Noviembre 14 y 21 y Diciembre 20 y 28 del año 1933; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja le prestéis vuestra aprobación.

Sala de la comisión, Noviembre 27 de 1934.

José Heriberto Martínez.—Luis Alberto Ahumada. — Alfredo J. Alonso. — Eduardo Bruchou. — José M. Bustillo. — Raúl Godoy. — Pedro Gropo. — Héctor S. López. — Juan T.